**REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**

DECRETO ___/2020, de __ de _____ , por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

I

El Reglamento que se aprueba tiene como objetivo fundamental desarrollar las funciones que la ley le confiere a la Intervención General de la Junta de Andalucía como centro del control interno y centro directivo y gestor de la contabilidad pública. Se regulan asimismo las funciones que competen a la Intervención General en materia de supervisión continua.

La regulación contenida en la norma viene a desarrollar el título V del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, que ha sufrido importantes modificaciones en lo relativo a la función de control interno en las sucesivas leyes 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 y 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.

El Reglamento que ahora se promulga viene a sustituir al Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 149/1988, de 5 de abril, que se ha mantenido vigente, con todo su vigor, durante prácticamente treinta años con apenas una ligera modificación aprobada en 2004. Esta sustitución, por tanto, viene exigida por la necesidad inaplazable de adecuar las soluciones normativas de aplicación del control interno a la realidad del sector público de la Junta de Andalucía en la actualidad, bien diferente a la existente en 1988, que ya ha propiciado los citados cambios legislativos operados .

Las diferencias entre ambos momentos son variadas y profundas, pero, ante la necesidad de destacar cuáles de ellas han hecho más necesaria la reforma legal de la función de control interno y la de la normativa de desarrollo de la misma que representa el presente Reglamento, deberían citarse las siguientes circunstancias:

a) La primera de ellas es el exponencial salto cuantitativo que el Presupuesto de la Junta de Andalucía ha experimentado en este dilatado período. El volumen de gasto que éste ha alcanzado y el elevado número de actos de gestión que requieren ser tramitados para su ejecución, la incorporación progresiva de gastos de tipo masivo, la proliferación de normas que lo disciplinan, entre otras circunstancias, han supuesto una creciente complejidad en la gestión económico financiera que implica también la necesidad de dotar al control interno de más modernas y eficaces herramientas de actuación que persigan la máxima eficiencia de sus resultados con los recursos disponibles.

b) Al mismo tiempo, la estructura del sector público de la Junta de Andalucía mediante la que se desarrollan los ingresos y gastos públicos se ha visto modificada sustancialmente, no solo en su tamaño, sino, fundamentalmente, en su composición. Si hubiera que referirse a un aspecto

concreto de esta transformación deberíamos citar el crecimiento relativo experimentado en estos años por los servicios y actividades que hoy se gestionan a través de entidades del sector público instrumental de diversa tipología, que además han ido adquiriendo diferentes y nuevas formas jurídicas y operacionales lo que exige actualizar y hacer más adecuados los procedimientos de control y la planificación y la gestión contable.

c) En el largo período de vigencia del anterior Reglamento el control previo ha introducido escasas modificaciones en su forma de ejercicio. Por el contrario, como consecuencia de un mayor crecimiento relativo del gasto público ejecutado por entidades sometidas a la modalidad de control financiero, así como por el peso también creciente de la actividad administrativa de fomento, sin olvidar el control de los gastos financiados con fondos europeos y las exigencias que en relación con ellos ha ido imponiendo la Comisión Europea a los órganos de control, se ha ido produciendo una mayor relevancia de la inicialmente incipiente modalidad de control financiero que ha conllevado la regulación de algunos de sus aspectos.

No obstante, tanto la modalidad de control previo como la de control financiero deben ser objeto de revisión además de que, habiendo perdido buena parte de su justificación en el contexto actual la correspondencia entre tipología de entes, tipo de gestión pública y modalidad de control, como tradicional dicotomía entre modalidades de control excluyentes entre sí, ésta requiera ser superada por una concepción en la que las diversas técnicas de control puedan ser aplicadas cuando sean las más adecuadas a los objetivos de éste, reforzando tanto los mecanismos de control previo como los de control financiero.

Por ello, la mejora en la regulación de las técnicas del control financiero y del control previo discurre en paralelo con la necesidad de que las dos modalidades clásicas del control interno, a saber, el control previo y el control financiero, dejen de ser compartimentos estancos en función de la tipología de los entes a que deban aplicarse y pasen a ser modalidades de control complementarias que permitan optimizar los resultados de mejora y mayor eficiencia en la gestión que constituye su objeto.

d) Es preciso citar también el hecho de que la aplicación de las nuevas tecnologías tiene un impacto transcendental en el ejercicio de las funciones contables y de control. En particular, las posibilidades que ofrece el tratamiento masivo de datos que procuran los medios actuales sitúa a las técnicas de control, a la gestión contable y a la rendición de información económico-financiera en una nueva dimensión.

e) Por su parte, en el ámbito de las competencias contables de la Intervención General, hay que señalar que las exigencias de rendición de información económico-financiera ante instancias nacionales y europeas, derivadas de los mecanismos de control del déficit y la deuda pública ha supuesto un cambio de paradigma en el desempeño de las funciones de la Intervención General.

f) No podemos dejar de referirnos tampoco a nuevos cometidos asumidos relacionados con el conocimiento de que la Intervención General dispone sobre la actividad financiera del sector público regional en su conjunto, circunstancia que la ha emplazado a realizar diversas actividades prácticamente inéditas hasta ahora, entre las que cabe destacar, fundamentalmente, las numerosas peticiones de auxilio que recibe la Intervención, procedentes de juzgados y tribunales, así como a la

atribución de competencias en materia de supervisión continua como tarea que requiere la incorporación de nuevas ópticas al control que la desarrolla cuyos resultados deben servir a la evaluación de la eficacia de nuestro sector público.

Este contexto, que es análogo al existente en otras administraciones territoriales de nuestro entorno, incluida la de la Unión Europea, requiere por un lado, hacer del control un proceso más integrado en la gestión, que se dote de instrumentos que le permitan atender en cada caso a la pluralidad de formas de gestión pública en la forma que resulte más efectivo, que su desarrollo gane en predecibilidad y seguridad jurídica, y que incorpore, además de los aspectos formales y financieros tradicionales, los más novedosos que permitan ofrecer resultados útiles para la evaluación de la eficacia de la gestión.

El Reglamento se estructura en once capítulos, en los que se regulan las más importantes áreas de actuación de la Intervención General, teniendo el primero de ellos carácter preliminar, en el que se abordan diversas cuestiones de alcance general.

II

De las normas contenidas en el capítulo I, Disposiciones Generales, debemos destacar los preceptos dedicados a definir las dos principales modalidades de control reguladas en el Reglamento, los deberes del personal controlador y la definición y delimitación del concepto de alcance del control interno.

El artículo 2 establece que la función de control interno tiene por objeto comprobar que el funcionamiento del sector público de la Junta de Andalucía, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y, en su caso, a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y de buena gestión financiera, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento. Con esta definición pretende delimitarse el alcance objetivo del control que lleva a cabo la Intervención, como el ejercido sobre la actividad económico-financiera del sector público. Esta delimitación informa la regulación de las dos modalidades de control interno bajo las que actuará la Intervención, de tal modo que, en cualquiera de sus modalidades, dicha actividad de control se ciñe a su ámbito objetivo propio, distinto de otros campos de la actividad administrativa, que se encuentran regulados por otras disciplinas distintas del Derecho financiero.

En el mencionado artículo se reflejan las tradicionales modalidades de control, el control previo y el control financiero o posterior. La nueva denominación de control previo, introducida en la modificación del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía mediante la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, ha pretendido englobar en la misma a todas las actuaciones de fiscalización realizadas ex ante y sustituir con mayor precisión la anterior denominación de “función interventora” que sugería el otorgamiento a los controles ex ante de la consideración de función principal de la Intervención. La sustitución del término de “función interventora” resulta precisa fundamentalmente por el necesario desarrollo que han experimentado otras técnicas de control de la misma importancia, al menos, que los que engloba dicho término. Este cambio terminológico, incorporado al Reglamento, anuncia también, como ha quedado expresado ya en esta exposición de motivos, el desarrollo de un avance en la concepción del control interno del sector público que pretende

flexibilizar la tradicional dicotomía, según la cual la administración general se sometía a control previo, mientras la administración instrumental quedaba sujeta a control financiero.

A partir de ahora, en el ámbito de las entidades instrumentales, podrán aplicarse procedimientos de control previo, con efectos suspensivos y, en sentido inverso, el control financiero debe convertirse en una técnica habitual en la administración general, especialmente para determinados tipos de operaciones o gastos. En consecuencia, se puede afirmar que en el Reglamento ambas modalidades de control lejos de ser excluyentes deben ser de aplicación complementaria allá donde resulta más adecuado.

En el precepto relativo a los deberes del personal controlador se ha regulado la conducta que deben adoptar las personas titulares de las Intervenciones cuando, en el ejercicio de sus funciones, conozcan hechos que puedan revestir el carácter de infracción contable, penal o administrativa, supuesto de hecho que se contempla como desencadenante de la preceptiva comunicación por parte de las personas titulares de Intervenciones que en el ejercicio de sus funciones puedan detectarlas.

El artículo 11, tras calificar las funciones de control como actividades de carácter profesional, realizadas por personal funcionario, exige que todos los actos definitivos de control se encuentren suscritos por dicho personal.

El artículo 12 regulador del alcance del control informa toda la regulación del control interno contenida en el mismo. En el ejercicio de las funciones auditoras e interventoras el concepto de alcance resulta fundamental. Toda actuación de control que desarrolle la Intervención General, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, debe tener un alcance previamente definido en normas y documentos formalmente protocolizados. El alcance así definido delimita las obligaciones legales del personal de Intervención y, como correlato sus responsabilidades y, consecuentemente, los resultados esperables de las actuaciones de control.

III

El capítulo II, relativo a la organización de la Intervención General, estructura a la misma en Divisiones entre las que se distribuyen las tareas horizontales de dirección y coordinación de las funciones reguladas en este Reglamento y que se desempeñan respecto de todo el centro directivo, y las Intervenciones que son las que desarrollan las mencionadas funciones en los ámbitos materiales, orgánicos o funcionales que les sean encomendados. El esquema de esta estructura responde así a una mayor adaptabilidad de los recursos a los cambios en la estructura y organización de consejerías, agencias y entidades y a las modalidades de control que puedan ejercerse sobre las mismas.

En lo que se refiere al personal de las Intervenciones, distinto de la propia persona titular de la Intervención y la persona titular de la Intervención Adjunta, el artículo 15 prevé la adscripción de los puestos con nivel de jefatura de sección a la relación de puestos de trabajo de la Intervención General como medida de refuerzo de su autonomía, y faculta a la persona titular de la Intervención General para dirigirse a los órganos competentes en materia de personal de las consejerías y

agencias, instando la adopción de las medidas de gestión de personal que se consideren necesarias para el adecuado desarrollo de las funciones encomendadas a la Intervención y ser oída en las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que afecten a las diferentes Intervenciones y en los expedientes disciplinarios que puedan ser incoados contra dicho personal, antes de dictar resolución.

IV

En el capítulo III del Reglamento, el artículo 20 señala que el control previo tiene por objeto, en los términos regulados en este Reglamento, el control de la legalidad aplicable a los expedientes de gasto, a los de modificaciones presupuestarias, a determinadas operaciones de las entidades instrumentales sujetas a control financiero, así como la comprobación material del gasto.

Estos preceptos ejemplifican con claridad que la diferencia entre los sintagmas “función interventora” y “control previo” no es meramente terminológica ya que conlleva una mayor amplitud del concepto del segundo de los términos. La definición del control previo y la enumeración de las actuaciones que el mismo comprende, ponen de manifiesto el cambio fundamental introducido en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía: la aplicación de esta modalidad de control desborda los límites de la administración general y de los expedientes de gasto, ya que, por un lado, se extiende al control previo de determinadas operaciones de las entidades instrumentales y, por otro, a actuaciones que no se manifiestan a través de expedientes de gasto, como la comprobación material realizada mediante la presencia de representantes de la Intervención General en los actos de recepción de los contratos públicos y los informes previos de los expedientes de modificación presupuestaria. Elemento fundamental de esta nueva disposición lo constituye también la previsión de que los informes de control previo en las entidades sujetas a control financiero puedan tener efectos suspensivos.

En esta nueva regulación del control interno, las actuaciones de control previo se han clasificado en un doble nivel. En un primer nivel se han enumerado, en el artículo 21, las actuaciones que comprende el control previo, y que son las siguientes: a) la fiscalización previa de los gastos y las obligaciones b) los informes previos de las modificaciones presupuestarias; c) la comprobación material del gasto; y, d) el control previo de determinadas operaciones realizadas por las entidades sujetas a control financiero.

En un segundo nivel, en el artículo 23, se han enumerado y regulado lo que en el nuevo reglamento se denominan fases de la fiscalización previa, señalándose qué fases del expediente de gasto serán objeto de fiscalización. La nueva regulación ofrece una mayor claridad, al señalar, sin género de dudas, qué fases de los expedientes de gasto van a ser objeto de control. En este sentido, queda claro, por un lado, que serán objeto de fiscalización las fases de autorización y compromiso de gasto y de contracción de la obligación y, *sensu contrario*, que no constituyen fases independientes de fiscalización previa, la ordenación del pago y el pago material. Las razones de la modificación son evidentes. Por un lado, en el procedimiento de gestión del gasto público, la ordenación del pago se encuentra implícita en el reconocimiento de la obligación y, por otro lado, los procesos de ordenación y realización del pago transcurren hoy en día por cauces completamente automatizados, por medio de sistemas electrónicos que toman como referencia elementos procedentes de las fases anteriores del gasto, que sí han sido objeto de control, por lo que, al igual

que se encuentran integradas en una sola actuación el reconocimiento de la obligación del pago y su ordenación, en la intervención formal del primero se realiza también de forma acumulada la anteriormente disociada intervención material del pago.

El artículo 27 recoge la dualidad establecida en el artículo 90.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, de la fiscalización previa sin alcance previamente limitado y de la fiscalización previa con alcance limitado, expresión que hace referencia a que el examen de los expedientes de gasto en que consiste aquella, se referirá a la comprobación de que la documentación aportada por el órgano gestor del expediente reúne los requisitos básicos a los que se refieren las normas citadas.

A efectos de esta fiscalización limitada, en el Reglamento se enumeran algunos de los requisitos básicos de comprobación, realizando una remisión a lo que dispongan las resoluciones de la Intervención General, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para completar dicha enumeración.

En lo que al alcance de la fiscalización previa se refiere deben destacarse también las reglas para la justificación de los pagos de justificación posterior en el artículo 28 y las reglas especiales establecidas en materia de subvenciones en el artículo 29 relativas a la fiscalización del compromiso de gasto.

En el artículo 31 se regulan los gastos excluidos de fiscalización. El Reglamento opta por establecer que la exclusión a la que se refiere este artículo debe entenderse referida a las fases de aprobación y compromiso del gasto. No obstante, se establece que la exclusión de fiscalización previa podrá extenderse a todas las fases de fiscalización previa previstas en el artículo 23 cuando la Intervención General implante sobre estos gastos el control posterior previsto en el apartado 3 de aquel artículo.

Los supuestos en los que procederá la emisión de una nota de reparos en el artículo 33 se han tasado para los supuestos de fiscalización sin alcance previamente limitado y lógicamente se han remitido a la omisión de los requisitos básicos regulados en el artículo 27.2 para la fiscalización previa limitada.

En el artículo 34 se regula la discrepancia frente a los reparos de las intervenciones, en idénticos términos a los previstos actualmente-mientras que la regulación de las consecuencias de la omisión de la fiscalización previa del gasto se establece de modo similar al actualmente vigente, atribuyéndole la competencia para convalidar dicha omisión al Consejo de Gobierno o a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, en función de la cuantía del gasto.

En la sección 3ª de este capítulo se regulan los informes previos de las modificaciones presupuestarias conforme a lo dispuesto en el artículo 91.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, regulándose el objeto y alcance de este informe, que consiste, exclusivamente, en la verificación del cumplimiento de los preceptos previstos en el mencionado Texto Refundido y en la ley del Presupuesto vigente, reguladores del régimen jurídico de estos expedientes.

La sección 4ª regula el control previo de las entidades, servicios y gastos sujetos a determinadas modalidades de control financiero, en la que cabe destacar la atribución a la Intervención General de la facultad para determinar las operaciones que estarán sujetas a esta modalidad de control y el alcance de la misma y el establecimiento de los efectos suspensivos para los resultados desfavorables del control.

La sección 5ª del capítulo regula la comprobación material del gasto, recogiendo el régimen de responsabilidades del personal interventor por su asistencia a la misma en los términos en que se regula en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

V

Mención especial merece el control de los gastos de personal de consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial regulado en el capítulo IV, ámbito que ilustra la combinación de controles previos y posteriores que se complementan para hacer posible un control efectivo de estos gastos cuyas notas distintivas son, por un lado, su carácter masivo, y por otro lado su carácter de inaplazabilidad. En la nueva regulación concurren por ello procedimientos de control previo y de control financiero manteniendo, aunque ampliando, las soluciones adoptadas previstas en la Disposición adicional Sexta del Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, que se deroga en la Disposición derogatoria del Decreto por el que se aprueba el nuevo Reglamento.

VI

En el capítulo V se recogen los aspectos generales comunes al control financiero como modalidad de control interno, tales como los tipos de control financiero, los órganos competentes para desarrollarlo, los tipos de opinión o el Plan Anual de Control Financiero como instrumento de sistematización y planificación de los trabajos a realizar cada ejercicio por parte de la Intervención General.

En este ámbito se introducen también novedades como la regulación del informe de actuación y de las comunicaciones especiales como instrumentos de la puesta en conocimiento de distintos responsables de aquellas circunstancias relevantes puestas de manifiesto en las recomendaciones de control financiero y de su falta de seguimiento.

En la misma línea de procurar el mejor conocimiento del funcionamiento de las entidades sometidas al control financiero y posibilitar la adopción de medidas de mejora del mismo, se prevé la presentación al Consejo de Gobierno de un informe general sobre los resultados más significativos derivados de la ejecución del mismo.

El capítulo VI está dedicado al control financiero que se realiza sobre las entidades instrumentales y los consorcios que componen el sector público andaluz, que se lleva a cabo con posterioridad a la realización de las actividades y tiene por objeto comprobar si el funcionamiento de estas entidades se ajusta, además de a la legalidad, a los principios de eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera, con la finalidad de promover mejoras y establecer recomendaciones.

El capítulo se divide en cuatro secciones. En la sección 1ª se recogen las disposiciones generales del control financiero del sector público y, entre ellas, se contemplan los tipos de informe y una graduación de las recomendaciones en función de la relevancia de las deficiencias que se hayan detectado.

Se establece el procedimiento que ha de seguir el ente auditado para la implantación de las recomendaciones, así como el plazo en el que debe comunicar las medidas adoptadas. Como consecuencia de la no implantación de las recomendaciones se han previsto los supuestos en los que procede emitir un informe de actuación, derivado de la consideración de las medidas llevadas a cabo por el ente controlado a la vista de las recomendaciones emitidas en los informes, y se establecen asimismo las comunicaciones especiales que puede ser necesario realizar en los específicos supuestos que se prevén.

Por último, se establecen los supuestos en los que la contratación de auditorías se atribuye con carácter exclusivo a la Consejería competente en materia de hacienda y aquellos otros en los que la Intervención General debe informar con carácter previo a la contratación de otras auditorías a realizar por determinados entes.

La sección 2ª va dirigida al control financiero permanente, definido como el control financiero realizado de una manera continuada en el tiempo. Se regulan el ámbito objetivo de aplicación estableciendo el contenido mínimo de su alcance en función de las entidades sobre las que se realiza y se recogen los supuestos en los que se aplica, y las particularidades de contabilización en las entidades sometidas al régimen de contabilidad presupuestaria.

En la sección 3ª se recogen los supuestos de control financiero no permanente y en la sección 4ª los supuestos en los que se realizará la auditoría de los estados financieros cuyo objeto es el previsto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

VII

El capítulo VII contiene las disposiciones sobre los controles de las subvenciones y los controles de los gastos cofinanciados con los fondos europeos.

El control de las subvenciones, que se regula en la sección 1ª, va dirigido a las personas beneficiarias y entidades colaboradoras, con objeto de comprobar la correcta obtención, destino y disfrute de las subvenciones y es aplicable con independencia de la fuente de financiación por la que estas se hayan otorgado. El control de las subvenciones se realizará sobre una muestra de personas beneficiarias que serán seleccionadas, como regla general, teniendo en cuenta que contablemente la subvención que les fue otorgada esté totalmente pagada y justificada.

Se describe el procedimiento del control financiero, y se contempla la posibilidad de suspender el control en el supuesto de que se observen circunstancias que pudieran producir la devolución de los importes de las subvenciones concedidas por causas de nulidad o anulabilidad de la concesión.

Se especifica que la documentación de los controles financieros se sustancia en diligencias y en informes y a estos se les otorga el carácter de documento público.

Por otro lado se recogen las actuaciones que debe emprender el órgano gestor de la subvención cuando se propone un reintegro en un informe de control financiero de subvenciones. Puesto que el órgano gestor dispone de un plazo para aportar la documentación u observaciones necesarias al informe provisional, se ha previsto que el momento de plantear una discrepancia sobre el criterio aplicado por la Intervención General en su informe, sea una vez iniciado el procedimiento de reintegro y antes de dictar la propuesta de resolución de este procedimiento.

Se contempla igualmente el informe que anualmente debe emitir la Intervención General sobre la situación de los procedimientos de reintegro propuestos en los informes de control financiero de subvenciones que deben incoar los órganos gestores. Se fija una fecha límite para la remisión de la información por parte de los órganos gestores y se delimita el período que abarca y el contenido del informe.

Asimismo, se introduce, como novedad, la posibilidad de emisión de informe de actuación en los casos en que los órganos concedentes no emprendan actuaciones tendentes a recuperar las cantidades propuestas como reintegros en los informes de control financiero de subvenciones o en los casos en que no se atiendan las recomendaciones de especial relevancia realizadas por la Intervención General.

Las secciones 2ª y 3ª van dirigidas al control de los fondos europeos. En ellas se recogen los trabajos que debe realizar la Intervención General en su calidad de autoridad de auditoría de determinados programas operativos, de órgano de control en otros, y de organismo de certificación de los fondos europeos agrícolas.

VIII

El capítulo VIII se refiere a la supervisión continua introducida, por los artículos 96 bis y 96 ter del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, como un nuevo tipo de control financiero que deberá realizarse por la Intervención General sobre las entidades del sector público andaluz. Mediante dichas normas legales se ha atribuido a la Intervención General la función de supervisión continua de las entidades y organismos dependientes de la Junta de Andalucía, regulada en el artículo 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la que debe verificar, por un lado, la adecuada distribución competencial entre consejerías y agencias, la vigencia de los fines que en su día justificaron la creación de las entidades y, por otro, si las mismas constituyen el medio más idóneo para lograrlos, si bien su ejercicio efectivo se difiere a la aprobación de una Orden de la Consejería competente en materia de hacienda.

IX

El capítulo IX está dedicado a regular las funciones de la Intervención General como centro directivo y gestor de la contabilidad del sector público regional de Andalucía. El capítulo se estructura en cuatro secciones. La primera de ellas tiene un alto contenido conceptual e informador

del conjunto de la regulación de la materia contable. Entre sus preceptos cabe destacar el artículo 104, en el que se declaran incluidas en el sector público regional, a los efectos del Reglamento, al conjunto de entidades integradas en el sector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, aprobado por el Reglamento (UE) N.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. Por su parte, el artículo 108 enumera y define un elenco de principios contables, clasificados en dos grandes categorías: principios contables de carácter presupuestario y principios contables de carácter económico-patrimonial.

La sección 2ª regula las competencias en materia contable de la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda y de los servicios centrales de la Intervención General, así como de las diferentes Intervenciones. En lo que se refiere a las competencias de la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda, se le atribuye, entre otras, la competencia para aprobar el Plan de Contabilidad de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, residenciada hasta ahora en la persona titular de la Intervención General, medida que está motivada por la necesidad de elevar el rango de este importante instrumento de la contabilidad.

Del catálogo de competencias de la Intervención General merecen destacarse todas aquéllas que están relacionadas con el nuevo ámbito subjetivo y objetivo de la contabilidad pública, derivado de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la consecuente aplicación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, entre las que podemos citar las que se enuncian en el párrafo e) del apartado 1 del artículo 111 y en el párrafo e) del apartado 2 del mismo artículo, así como las nuevas competencias relacionadas con la creación del Registro Contable de Facturas y los informes sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.

En lo que se refiere a las Intervenciones, la competencia más novedosa que se recoge en el Reglamento, en el artículo 112.e), aunque se trata de funciones que, en cumplimiento de la normativa estatal en materia de estabilidad presupuestaria ya se vienen realizando, es la realización de auditorías y controles financieros, para verificar la existencia de obligaciones no registradas contablemente.

La sección 3ª, dedicada a la rendición de cuentas, enumera, en el artículo 114.1, a las personas y órganos obligados a la rendición de información para la formación de las cuentas y a la colaboración con la Intervención General de la Junta de Andalucía, aportando la información que se les requiera en tiempo y forma, siendo responsables de su contenido, así como de los efectos que pudieran derivarse de su falta de presentación o de su presentación incorrecta, incompleta o fuera de plazo. En esta misma sección, el artículo 116 regula exhaustivamente la estructura de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, dando, así, el rango adecuado a esta importante materia, que constituye el último hito del ciclo presupuestario.

La sección 4ª, última de este capítulo, está dedicada a otras obligaciones de rendición de información por la Intervención General, que se concretan en la información que debe rendirse al Parlamento de Andalucía y la información periódica que se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en Internet.

X

La importancia que han adquirido las numerosas obligaciones que recaen sobre la Intervención General, como centro directivo y gestor de la contabilidad del sector público regional, y que derivan de las normas europeas y nacionales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, han aconsejado dedicar un capítulo específico del Reglamento a las mismas, el capítulo X, desgajado del anterior, dedicado a la contabilidad.

Esta materia ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, llegando a ocupar en la misma una importante porción de los recursos humanos e informáticos del centro directivo. Al propio tiempo, no se puede desconocer el carácter crítico de estas funciones y las trascendentales consecuencias que se derivan de su ejercicio. Se trata de un campo en el que la fiabilidad de la información rendida, siempre primordial en el ámbito económico-financiero, adquiere una importancia capital, en cuanto que del seguimiento de las variables del déficit público, de la regla de gasto y de la deuda pública de la Junta de Andalucía, que realizan instancias nacionales y europeas, puede derivar la adopción de medidas de enorme impacto en las diferentes políticas.

Por todo ello, este capítulo contiene las herramientas necesarias para que la Intervención General pueda cumplir con estas obligaciones de rendición de información, por un lado, facultándola para exigir a los sujetos obligados y, por otra, emplazando a éstos a proporcionar la colaboración necesaria y cuanta información sea fijada por la normativa nacional y comunitaria.

XI

El capítulo XI del Reglamento se divide en dos secciones, la primera de las cuales está dedicada a establecer una serie de pautas de actuación que deberá seguir la Intervención General, y el funcionariado que de ella dependan, en las tareas cada vez más numerosas de colaboración de este órgano directivo con la Administración de Justicia. Los principios que han inspirado esta regulación han sido los siguientes:

a) Determinación clara de las tareas y funciones en las que la Intervención General de la Junta de Andalucía podrá desarrollar esta obligación constitucional de colaboración con los jueces y tribunales.

b) Puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de todos los medios, conocimientos técnicos e información que posee la Intervención General, con pleno respeto a la normativa procesal y judicial aplicable.

c) Facilitar que se designe en cada caso a la persona o personas más apropiadas para realizar la actuación de auxilio judicial de que se trate, y

d) Establecer las necesarias reglas de interrelación con el reciente Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo

a la Administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes.

La totalidad de los artículos que componen esta sección supone la fiel aplicación de tales principios. Así, sin ánimo exhaustivo, podemos destacar, entre otras, la concreción de la función de auxilio judicial mediante la realización de las tareas atribuidas a los servicios centrales de la Intervención General de centralizar, apoyar y asignar las peticiones hechas por los órganos judiciales, en el contexto de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a dicho órgano de control interno y contabilidad; de la remisión a lo dispuesto en el citado Decreto 4/2018, de 16 de enero, en todo lo referido a la solicitud de actuaciones de auxilio judicial consistentes en la emisión de informes periciales, y de designación del personal de la Intervención General para la realización de los mismos; la obligación de todo el personal de la Intervención de poner en conocimiento inmediato de la Intervención General las solicitudes de auxilio judicial que pudieran recibir de cualquier órgano jurisdiccional; o, la puesta a disposición de quienes hayan sido designados para la realización de actuaciones de auxilio judicial de todos los medios de los que dispone la Intervención General.

La sección 2ª de este capítulo regula una serie de funciones de la Intervención General, todas ellas incardinables en alguna de las dos grandes áreas funcionales del centro directivo (control interno y contabilidad), cuando no en las dos simultáneamente. Así, se regula la participación de los representantes de la Intervención General en las mesas de contratación, como órganos de asistencia técnica especializada de los órganos de contratación, determinándose los empleados públicos en los que recae ordinariamente esta función y su alcance.

En el artículo 130 se enumeran las funciones que desempeña la Intervención en el ámbito de la Tesorería, en línea con lo recientemente establecido en el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. Entre dichas funciones destaca la firma como clavero de las cuentas tesorerías y autorizadas de toda clase de operaciones realizadas en las mismas, si bien el precepto precisa que el alcance de dicha función se limita a constatar la competencia del resto de claveros que concurren a la firma de la operación de que se trate, así como las comprobaciones de los pagos extrapresupuestarios.

En esta misma sección se encuentra también la regulación de los informes de los proyectos de las bases reguladoras de las subvenciones y la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía. En lo que concierne a los informes sobre los proyectos de bases reguladoras se han delimitado diversos aspectos que puedan garantizar una mayor eficacia en el desarrollo de esta función. Estos informes han de versar, conforme a lo establecido en el artículo 118.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía sobre la concurrencia con otras normas vigentes con idéntica finalidad a subvencionar y sobre el cumplimiento de la normativa económico-presupuestaria y contable, aspectos ambos que se han definido y delimitado con objeto de asegurar una mayor concreción en el objeto perseguido con esta función. Como elemento necesario para la emisión de estos informes se ha relacionado la documentación que han de remitir los órganos concedentes junto con el borrador que se somete a informe. Entre esta documentación merece destacarse el plan estratégico previsto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, donde se enmarcan las subvenciones que se van a

regular.

La Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía es el instrumento de publicidad activa de las subvenciones que se otorgan en el ámbito de la Comunidad Autónoma por las consejerías y sus agencias. El Reglamento recoge los hitos y datos que la misma ha de contener para satisfacer las obligaciones de suministro de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y para cumplir con la obligación establecida en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Los responsables de trasladar la información necesaria son los órganos concedentes, siendo la Intervención General la responsable de su administración y custodia.

Finalmente se recoge también la competencia otorgada a la Intervención General por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de los requisitos para la consideración de medio propio personificado de la Junta de Andalucía a los efectos de los encargos de los poderes adjudicadores regulados en la mencionada ley.

XII

El presente Decreto contiene una aplicación transitoria del control financiero sobre los gastos del personal docente y sanitario. La razón de esta norma es la misma y consiste en la necesidad de disponer de las herramientas informáticas adecuadas para que el ejercicio de dichas funciones cuente con las debidas garantías legales y de efectividad.

En la disposición adicional única que contiene el Decreto se establece la previsión de la creación del Cuerpo de Interventores de la Junta de Andalucía.

La disposición derogatoria acuerda la derogación expresa del Reglamento de Intervención vigente desde 1988 y las normas de control financiero previstas en el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía. A su vez, se derogan parcialmente algunos preceptos del citado Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, que resultan incompatibles con la regulación contenida en el Reglamento que se aprueba o relativos a materias que se incorporan al mismo. Por otro lado, se derogan, también, sendos acuerdos de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras y del Consejo de Gobierno, cuyo contenido también se ha incorporado al Reglamento.

En la disposición final primera se establece la habilitación a la persona titular de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para el desarrollo del Decreto y para adecuar las relaciones de puestos de trabajo y las plantillas.

XIII

Por otro lado, la presente norma es respetuosa con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, el Reglamento que pretende aprobarse viene a sustituir al Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 149/1988, de 5 de abril. La necesidad de la reforma de esta norma tiene que ver con el hecho de su prolongada vigencia, y con las profundas modificaciones que se han producido en la realidad sobre la que opera, desde que se dictó, hasta hoy en día, que ya se han descrito.

Las líneas básicas de las funciones de la Intervención están diseñadas en el Título V del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y se ha considerado que el modo más eficaz de realizar el desarrollo de estas normas básicas es mediante la promulgación de un Reglamento con aspiración de generalidad, es decir, que contenga el conjunto de normas reglamentarias precisas para disponer de un cuerpo normativo completo sobre la materia, habida cuenta de la incorporación de numerosas normas de rango legal inexistentes a la fecha de aprobación del Reglamento que ahora se deja sin efecto, al tiempo que se ha redactado con pleno respeto al principio de proporcionalidad.

El Reglamento que se ha elaborado cumple con el principio de proporcionalidad, por cuanto se han incluido en su contenido, estrictamente, aquellas disposiciones que requieren de un desarrollo reglamentario. Por otro lado, aunque no se trata de una norma que tenga eficacia directa hacia los ciudadanos, sino que nos encontramos más bien ante una norma de auto organización, no por ello se han obviado las exigencias que imponen restricciones al contenido de aquella, teniendo siempre presente la necesidad de no producir una negativa inflación del ordenamiento. En este sentido, el ámbito material de regulación de este Reglamento es prácticamente el mismo que el de las dos principales normas que se derogan: el vigente Reglamento de Intervención de 1988 y, parcialmente, el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, a lo largo del texto del Reglamento se pueden encontrar diferentes normas de las que puede afirmarse que producirán una mejora de la eficacia en el desenvolvimiento de las funciones que le corresponden a la Intervención, ligada esta mejora, como ya ha quedado expuesto, a la actualización necesaria de las funciones de control al actual contexto de la gestión económico financiera del sector público. Asimismo, la mayor eficacia como objetivo de los procedimientos regulados en el Reglamento concurre con la eliminación de tareas cuyo objeto ha desaparecido por realizarse mediante procedimientos electrónicos las operaciones que antes eran objeto de comprobación, o con la instrumentación de modalidades de control, que permiten una más eficiente asignación de tiempos y de utilización de los recursos disponibles potenciando no obstante sus efectos, cumpliendo por ello también la nueva normativa con el principio de eficiencia regulatoria.

Además de ello, el presente Reglamento supone una mejora de la seguridad jurídica en este sector del ordenamiento, habida cuenta de que, tras su promulgación, el conjunto de las funciones de la Intervención de la Junta de Andalucía estará contemplado en una única norma reglamentaria, reduciéndose la relativa dispersión actualmente vigente, que se encuentra reflejada en la Disposición derogatoria del Decreto por el que se aprueba el Reglamento.

En este sentido, una sustancial mejora de la seguridad jurídica ha de venir de la mano de

nuevos aspectos recogidos en el Reglamento como el alcance del control, una de las piedras angulares de la función de control, de la regulación de los derechos y deberes del personal controlador, del establecimiento de las obligaciones y términos de la obligación de colaboración con el ejercicio del mismo, o de la determinación de los pronunciamientos y tipos de opinión en los informes y sus efectos.

En cuanto al principio de transparencia, la presente norma cumple con los tres aspectos que el artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considera definitorios de este principio. En efecto: a) Una vez que la norma se promulgue, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía publicará en su página web todos los documentos propios del proceso de elaboración del Reglamento. b) Los objetivos de la norma están claramente reflejados en su preámbulo y en diversos documentos de su proceso de elaboración, como la memoria justificativa y la que justifica el cumplimiento de los principios de buena regulación. c) Los potenciales destinatarios de la norma han sido oídos durante el proceso de elaboración, a través de los mecanismos de audiencia previstos en la ley.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día ___ de _____ de 2020.

D I S P O N G O:

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

Se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía que se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Cuerpo de Interventores y Auditores de la Junta de Andalucía.

En el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo de Gobierno presentará al Parlamento de Andalucía un proyecto de Ley de creación del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Junta de Andalucía.

Disposición transitoria única.

La aplicación de lo dispuesto en el capítulo IV del Reglamento al control de los gastos que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones del personal docente que presta sus servicios en la Consejería competente en materia de educación y del personal de los centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio Andaluz de Salud no se llevará a cabo hasta tanto sean adaptados los sistemas informáticos que lo permitan y así lo anuncie la Intervención General, mediante Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Mientras tanto les resultará de aplicación lo previsto en su normativa específica.

Disposición derogatoria única. *Disposiciones que se derogan.*

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan a este Decreto y, específicamente, las siguientes:

- a) El Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 149/1988, de 5 de abril.
- b) El capítulo IV del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía.
- c) El artículo 56.4 y todas las menciones a la intervención material del pago que se contienen en el Decreto 40/2107, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, así como la disposición adicional 6ª del mismo Decreto 40/2017, de 7 de marzo.

2. Asimismo quedan sin efecto los siguientes acuerdos:

- a) El Acuerdo de 5 de junio de 1992, de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, por el que se dictan instrucciones en relación con la tramitación de los expedientes de convalidación de gastos.
- b) El Acuerdo de 26 de enero de 1993, del Consejo de Gobierno, sobre el establecimiento del control financiero permanente sobre determinados gastos, organismos y servicios de la Junta de Andalucía.
- c) El Acuerdo de 19 de abril de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el programa de control a realizar en el ejercicio 2005 de las empresas de la Junta de Andalucía sometidas a control financiero permanente, y se establecen otras medidas de control financiero.
- d) El Acuerdo de 8 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Control a realizar en el ejercicio 2007 y siguientes de las empresas de la Junta de Andalucía sometidas a control financiero permanente, y se establecen otras medidas de control financiero.
- e) El Acuerdo de 23 de noviembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Anexo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de enero de 1993, por el que se establece el control financiero permanente sobre determinados gastos, organismos y servicios de la Junta de Andalucía.

Disposición final primera. *Desarrollo y ejecución.*

1. Se habilita a la persona titular de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

2. Asimismo, se habilita a la persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior para adecuar las relaciones de puestos de trabajo y las plantillas presupuestarias a lo dispuesto en este Decreto, así como a realizar las creaciones, supresiones y modificaciones necesarias en cualquiera de los puestos de trabajo, atendiendo a los principios de eficiencia, austeridad, racionalización y reducción del gasto público.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ÍNDICE

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

- Artículo 1. Objeto
- Artículo 2. Órgano superior de control interno
- Artículo 3. Órgano directivo y gestor de la contabilidad pública
- Artículo 4. La supervisión continua
- Artículo 5. Principios de actuación
- Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio
- Artículo 7. Facultades del personal interventor
- Artículo 8. Obligaciones de colaboración
- Artículo 9. Facultades en el ámbito del control financiero
- Artículo 10. Deberes del personal controlador
- Artículo 11. Ejercicio profesional de la función de control
- Artículo 12. Alcance del control

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN

Sección 1ª. Estructura y carácter de la Intervención General

- Artículo 13. La Intervención General y su autonomía
- Artículo 14. Estructura
- Artículo 15. Adscripción orgánica

Sección 2ª. Los servicios generales de la Intervención General

- Artículo 16. La persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía
- Artículo 17. Las personas titulares de las direcciones de División

Sección 3ª. Las Intervenciones

- Artículo 18. Las personas titulares de las Intervenciones
- Artículo 19. Sustitución de las personas titulares de las Intervenciones

CAPÍTULO III. EL CONTROL PREVIO

Sección 1ª. Aspectos generales

- Artículo 20. Concepto y naturaleza
- Artículo 21. Actuaciones

Sección 2ª. Fiscalización previa

- Artículo 22. Concepto y objeto de la fiscalización previa
- Artículo 23. Fases de la fiscalización previa.
- Artículo 24. Competencias
- Artículo 25. Momento y plazo para la realización de la fiscalización previa
- Artículo 26. Remisión de expedientes, para su fiscalización, por medios electrónicos
- Artículo 27. Alcance de la fiscalización previa
- Artículo 28. Fiscalización previa de la justificación de los pagos de justificación posterior
- Artículo 29. Reglas especiales de fiscalización en materia de subvenciones
- Artículo 30. La fiscalización por muestreo

- Artículo 31. Exclusión y sustitución de la fiscalización previa
- Artículo 32. La fiscalización favorable
- Artículo 33. Los reparos y observaciones
- Artículo 34. Las discrepancias
- Artículo 35. La omisión de fiscalización
- Artículo 36. Las resoluciones de fiscalización limitada previa

Sección 3ª. Los informes previos de las modificaciones presupuestarias

- Artículo 37. Supuestos en los que procede y competencia
- Artículo 38. Objeto y alcance del informe

Sección 4ª. El control previo de las entidades, servicios y gastos sujetos a control financiero

- Artículo 39. Alcance y efectos del control previo de la aprobación de gastos
- Artículo 40. Alcance y efectos de la comprobación material del gasto
- Artículo 41. Competencias

Sección 5ª. La comprobación material del gasto

- Artículo 42. Objeto y finalidad
- Artículo 43. Supuesto de designación de representante y actuación en la comprobación material del gasto
- Artículo 44. La personas representante de la Intervención General
- Artículo 45. El asesoramiento de la persona que representa a la Intervención General
- Artículo 46. Acta de recepción
- Artículo 47. Efectos de la comprobación y efectos
- Artículo 48. Responsabilidad de la persona representante de la Intervención y de su personal asesor

CAPÍTULO IV. EL CONTROL DE LOS GASTOS DE PERSONAL

- Artículo 49. Ámbito de aplicación
- Artículo 50. Personal de consejerías y agencias administrativas
- Artículo 51. Personal de agencias de régimen especial
- Artículo 52. Personal de agencias públicas empresariales
- Artículo 53. Tablas retributivas
- Artículo 54. Control de actos y variaciones de contenido económico
- Artículo 55. Fiscalización del reconocimiento de la obligación
- Artículo 56. Control posterior de la nómina

CAPÍTULO V. EL CONTROL FINANCIERO. ASPECTOS GENERALES

- Artículo 57. Concepto y naturaleza
- Artículo 58. Supuestos de aplicación del control financiero
- Artículo 59. El control financiero de las Universidades públicas andaluzas
- Artículo 60. El Plan Anual de Control Financiero
- Artículo 61. Informes generales de control
- Artículo 62. Órganos competentes
- Artículo 63. Asesoramiento técnico y facultativo
- Artículo 64. Planificación y desarrollo de los trabajos
- Artículo 65. Informes de control financiero
- Artículo 66. Tipos de opinión

CAPÍTULO VI. EL CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO

Sección 1ª. Disposiciones generales

- Artículo 67. Objeto y finalidad
- Artículo 68. Tipos de control financiero del sector público
- Artículo 69. Ámbito de aplicación
- Artículo 70. Informes de control financiero del sector público
- Artículo 71. Recomendaciones
- Artículo 72. Seguimiento de recomendaciones y su evaluación por la Intervención actuante
- Artículo 73. Informe de actuación
- Artículo 74. Comunicaciones especiales
- Artículo 75. Contratación de auditorías

Sección 2ª. Control financiero permanente

- Artículo 76. Concepto y competencia
- Artículo 77. Ámbito de aplicación.
- Artículo 78. Ámbito objetivo del control financiero permanente
- Artículo 79. Contabilización de documentos en entidades sometidas a control financiero permanente y al régimen de contabilidad presupuestaria

Sección 3ª. Supuestos de control financiero no permanente

- Artículo 80. Entidades no sujetas a control financiero permanente
- Artículo 81. El Control financiero de los ingresos: ámbito y competencias

Sección 4ª. Auditoría de estados financieros

- Artículo 82. Finalidad
- Artículo 83. Auditorías de estados financieros competencia de la Intervención General

CAPÍTULO VII. EL CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES Y DE LOS GASTOS COFINANCIADOS CON FONDOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Sección 1ª. Control financiero de subvenciones

- Artículo 84. Objeto del control financiero de subvenciones
- Artículo 85. Personas y entidades sometidas al control financiero de subvenciones
- Artículo 86. Obligación de colaboración
- Artículo 87. Procedimiento de control financiero de subvenciones
- Artículo 88. Los Informes de control financiero de subvenciones
- Artículo 89. Actuaciones del órgano concedente
- Artículo 90. Procedimiento de discrepancia sobre los informes de control financiero de subvenciones
- Artículo 91. Informe de seguimiento de los informes con propuesta de reintegros

Sección 2ª. Control de los gastos cofinanciados por Fondos Europeos

- Artículo 92. Objeto
- Artículo 93. Ejercicio del control
- Artículo 94. Estrategia de auditoría
- Artículo 95. Procedimiento de control
- Artículo 96. Actuaciones del seguimiento del control de operaciones de fondos europeos que financien subvenciones y ayudas
- Artículo 97. Planes de comprobación
- Artículo 98. Dictamen e Informe anual

Sección 3ª. Auditoría del Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas

Artículo 99. La auditoría de los fondos europeos agrícolas

CAPÍTULO VIII. LA SUPERVISIÓN CONTINUA

Artículo 100. Supervisión continua de las entidades dependientes de la Junta de Andalucía

Artículo 101. Principios orientadores del sistema

Artículo 102. Medios para lograr la finalidad del sistema

Artículo 103. Obligación de colaboración y de suministro de información

CAPÍTULO IX. LA CONTABILIDAD

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 104. Definición y competencias contables

Artículo 105. Objeto

Artículo 106. Ámbito de aplicación

Artículo 107. Fines de la contabilidad

Artículo 108. Principios contables

Sección 2ª. Competencias en materia contable

Artículo 109. Órganos responsables

Artículo 110. Funciones ejercidas por la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda

Artículo 111. Funciones ejercidas por los servicios centrales de la Intervención General

Artículo 112. Funciones ejercidas por las Intervenciones

Sección 3ª. Rendición de cuentas

Artículo 113. Disposiciones generales

Artículo 114. Órganos responsables

Artículo 115. La Cuenta General

Artículo 116. Estructura de la Cuenta General

Artículo 117. Formación de la Cuenta General

Sección 4ª. Otras obligaciones de rendición de información

Artículo 118. Información al Parlamento de Andalucía

Artículo 119. Publicación de información periódica

CAPÍTULO X. OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Artículo 120. Competencia

Artículo 121. Medios de remisión de la información

Artículo 122. Facultad de la Intervención General para cumplir con las obligaciones de suministro de información

Artículo 123. Obligaciones de suministro de información

CAPÍTULO XI. EL AUXILIO JUDICIAL Y OTRAS FUNCIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

Sección 1ª. El auxilio judicial

Artículo 124. Competencias de la Intervención General

Artículo 125. Normas de reserva, secreto y protección de datos personales

Artículo 126. Realización de las tareas generales de auxilio judicial

Artículo 127. Realización de las tareas de pericia judicial

Sección 2ª. Otras funciones de la Intervención General

Artículo 128. Asistencia a mesas de contratación

- Artículo 129. Asistencia a órganos colegiados
- Artículo 130. Competencias en materia de tesorería
- Artículo 131. Informes previos de las bases reguladoras de subvenciones y subvenciones
- Artículo 132. La Base de Datos de Subvenciones
- Artículo 133. Informe sobre la condición de medio propio personificado

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto.*

Este reglamento tiene por objeto el desarrollo de la organización y de las funciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía, como superior órgano de control interno y de la supervisión continua del sector público de la Junta de Andalucía, con carácter de órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de la gestión económica-financiera definido en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el ámbito de lo dispuesto en el Título V del referido Texto Refundido y en las demás normas que resulten aplicación.

Artículo 2. *Órgano superior de control interno.*

1. La función de control interno que tiene atribuida la Intervención General tiene por objeto comprobar que el funcionamiento del sector público de la Junta de Andalucía, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y, en su caso, a los principios de eficacia, eficiencia, economía y de buena gestión financiera, con sujeción a lo dispuesto en el TRLHGP, este Reglamento, y otras normas que lo desarrollen. El control interno comprende dos modalidades, el control previo y el control financiero.

2. El control previo se aplica al conjunto de las operaciones sujetas al mismo, se ejerce con anterioridad a que se formalicen o concierten y tiene por objeto verificar su legalidad. El control previo tendrá efectos suspensivos en los términos a que se refiere este Reglamento.

3. El control financiero tiene por objeto comprobar el correcto y eficiente funcionamiento de la actividad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de los consorcios del artículo 4 y de las entidades contempladas en el artículo 5 del TRLHGP, se realiza *a posteriori*, se aplica mediante procedimientos y técnicas de auditoría, y tiene carácter no suspensivo.

4. No obstante, lo expuesto en los apartados anteriores, determinados controles, como el control de gastos de personal al que se refiere el capítulo IV, u otros que decida la Intervención General en cumplimiento de las facultades que la ley y este Reglamento le atribuyen podrán realizarse empleando de forma complementaria ambas modalidades de control.

Artículo 3. *Órgano directivo y gestor de la contabilidad pública.*

La contabilidad pública del sector público andaluz se configura como un sistema de información económico-financiera y presupuestaria que tiene por objeto mostrar, a través de estados

e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del sector público andaluz.

La Intervención General ejerce las potestades derivadas de su carácter de centro directivo y gestor de la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en los artículos 100 y 101 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el capítulo VIII de este Reglamento y en las demás normas aplicables.

Además la Intervención General es el órgano competente para el suministro de la información económico financiera de las entidades clasificadas como subsector Administración Regional en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, necesaria para la elaboración de las cuentas económicas del sector público y para la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en los términos previstos en el artículo 101 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el capítulo IX de este Reglamento y en las demás normas aplicables.

Artículo 4. *La supervisión continua.*

La supervisión continua tiene como finalidad comprobar la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de las entidades y fondos sometidos por la ley a la aplicación de este sistema, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de las causas que justifiquen su permanencia como el medio más idóneo para lograr los fines que tengan asignados.

La Intervención General desarrollará la planificación y ejecución de las actuaciones de supervisión continua que le atribuye el artículo 96 ter del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en los términos de la misma y de los que se establecen en este reglamento.

Artículo 5. *Principios de actuación.*

1. En el ejercicio de sus funciones de control interno, la Intervención General estará sometida a los siguientes principios:

- a) Plena autonomía, en los términos previstos en el artículo 13.
- b) Suficiencia de medios, para lo que dispondrá de los recursos que resulten necesarios para hacer frente a las obligaciones de control que la Intervención General tiene atribuidas.
- c) Ejercicio desconcentrado, que supone la distribución de competencias del órgano directivo entre las diferentes Intervenciones, de acuerdo con los gastos controlados.
- d) Procedimiento contradictorio, materializado, a través de los trámites previstos en el TRLGHP y en este Reglamento.
- e) Alcance delimitado de sus actuaciones de control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.

2. En el ejercicio de sus funciones en materia de contabilidad pública, la Intervención General se sujetará, además de a los principios de plena autonomía y ejercicio desconcentrado, a los siguientes:

- a) Transparencia, en los términos y condiciones establecidos en la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como en la de transparencia pública.
- b) Claridad, en orden a hacer comprensibles las actividades del sector público de la Junta de Andalucía y del entorno en el que opera.
- c) Relevancia, en el sentido de ofrecer una información para la evaluación de la actividad del sector público, por resultar de utilidad y comprender toda aquella que posea importancia relativa.

d) Fiabilidad, evitando errores materiales y sesgos y ofreciendo una información completa y objetiva, en la que el fondo económico de las operaciones prevalezca sobre su forma, siendo prudente en las estimaciones y valoraciones.

e) Comparabilidad, facilitando que se puedan establecer comparaciones con otras Administraciones o entidades, así como con la información de la propia Junta de Andalucía correspondiente a diferentes periodos.

Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.

1. Con independencia de otros medios de dirección y coordinación, la Intervención General dirigirá y coordinará la actuación de todas las unidades que de ella dependen a través de instrucciones y órdenes de servicio.

2. Las instrucciones y órdenes de servicio de la Intervención General serán difundidas y publicadas a través de los medios que aseguren un conocimiento inmediato y eficaz por parte de sus destinatarios y serán de observancia obligada por todo el personal que dependa orgánica o funcionalmente del citado órgano directivo.

3. Las consultas de las personas titulares de órganos y dependencias a la Intervención General sobre asuntos que, por su especificidad e importancia deban ser resueltas por la persona titular de la Intervención General deberán ponerse en conocimiento, cuando tengan alcance general, de todas las personas a las que pueda afectar o interesar el asunto de que se trate en relación al ejercicio de sus funciones.

Artículo 7. Facultades del personal interventor.

1. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, los servicios centrales de la Intervención General y las diferentes Intervenciones podrán recabar directamente de los distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía o de las entidades del sector público andaluz los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que consideren necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el adecuado ejercicio de sus funciones de control interno. Cuando los asesoramientos e informes hayan de recabarse de órganos cuya competencia se extienda a la totalidad de la Administración de la Junta de Andalucía, se solicitarán, en todo caso, por la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

2. La Intervención General de la Junta de Andalucía podrá instar la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la Hacienda Pública.

Artículo 8. Obligaciones de colaboración.

1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como quienes ostenten la jefatura o dirección de oficinas públicas, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios y quienes, en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo al personal funcionario de la Intervención General encargado de la realización del control. Dicho deber se extiende, también, a las personas responsables de las entidades, oficinas o servicios a quienes la Junta de Andalucía encomiende la gestión recaudatoria de sus ingresos.

Este deber comprende facilitar el acceso a las oficinas donde se desarrolle la actividad y la puesta a disposición y la entrega, en su caso, de la documentación que les sea requerida para llevar a cabo el citado control. La persona responsable de la entidad auditada dejará constancia expresa de que los elementos de la documentación entregada constituyen la integridad de los antecedentes

considerados necesarios para la realización del control en la solicitud realizada por el órgano de control.

2. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo requerimiento del órgano de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía actuante, toda clase de datos, informes o antecedentes, con trascendencia para las actuaciones de control que desarrolle, deducidos directamente de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

3. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, previa la suscripción del convenio al que se refiere el artículo 41, apartado 3, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en los supuestos que proceda, prestará la asistencia que, en su caso, corresponda al personal que, como consecuencia de su participación en actuaciones de control, sea objeto de citaciones por órganos jurisdiccionales. Dicha asistencia deberá ser solicitada por el órgano directivo correspondiente, y requerirá de la previa autorización de la persona que ostente la jefatura del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, salvo los supuestos a que se refiere el artículo 44 de la citada Ley 9/2007, de 22 de octubre, que se regirán por el mismo y sus normas de desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Facultades en el ámbito del control financiero.

Además de lo establecido en el artículo 8.1, en el desarrollo de las funciones reguladas en los capítulos V, VI y VII del presente Reglamento, al amparo de lo establecido en el artículo 93.5 del TRLGHP, el personal de la Intervención que realice los controles financieros tendrá las siguientes facultades:

- a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.
- b) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos para llevar a cabo las funciones de control.
- c) El libre acceso a los locales e instalaciones que forman parte del sector público de la Junta de Andalucía.
- d) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen las actividades subvencionadas o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
- e) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento necesario para determinar el correcto empleo de los fondos públicos.
- f) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

Artículo 10. Deberes del personal controlador.

1. El personal dependiente de la Intervención General de la Junta de Andalucía que ejerza la función de control previo o realice el control financiero o la supervisión continua deberá guardar la debida reserva en relación con los asuntos de los que conozca en el desempeño de sus funciones.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno y la contabilidad solo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, cuando en función de la normativa de aplicación a las infracciones que puedan detectarse sea precisa su utilización.

2. El personal dependiente de la Intervención General de la Junta de Andalucía que desarrolle las funciones de control interno atribuidas a ésta, ejercerá su competencia profesional con respeto a la normativa vigente en materia de control interno, y a las instrucciones y criterios generales de aplicación dictados por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

3. El personal interventor, cuando en la práctica de un control aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción de las que se establecen a continuación, dará traslado de dicha circunstancia a los respectivos órganos competentes por conducto de la persona titular de la Intervención General:

- a) Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
- b) En el caso de posibles infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria reguladas en el artículo 28 la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que no siendo constitutivas de delito afecten a presuntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley.
- c) En las infracciones en materia de responsabilidad contable no comprendidas en el epígrafe b) anterior a las que se refiere el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
- d) En el caso de cualesquiera otra posibles infracciones administrativas distintas de las anteriores que, por su relevancia deban ser comunicadas.

A los efectos previstos en el primer párrafo de este apartado la unidad de intervención actuante hará constar las mencionadas circunstancias en un informe en el que se recogerán los hechos constatados, la identificación de los presuntos infractores o responsables, la cuantificación o estimación económica si fuera posible, y las actuaciones que, en su caso se hayan llevado a efecto ajustando su actuación a la normativa específica y a las instrucciones que sobre la cuestión apruebe la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Artículo 11. Ejercicio profesional de la función de control.

1. El ejercicio de las funciones de control interno y contabilidad reguladas en este Reglamento supone el desempeño profesional de funciones públicas realizadas por el personal habilitado específicamente para ello, en los términos que establezcan las disposiciones de aplicación.

2. Todas las actuaciones de control previo o financiero, y, en concreto los distintos informes de control, deberán estar suscritos por el personal funcionario competente que participe como intervención actuante, sin perjuicio de las funciones de dirección y coordinación a las que se refieren los artículos 5.1 y 15.2 y de las facultades que conforme a sus atribuciones correspondan a la persona titular de la Intervención General.

Artículo 12. Alcance del control.

1. Todas las actuaciones de control desarrolladas por la Intervención, sin excepción alguna, deben tener previamente definido un alcance determinado. El alcance así previamente definido delimitará las obligaciones profesionales del personal de la Intervención actuante, así como los resultados de las actuaciones de control que se desarrollen en cada caso.

2. El alcance de los controles que se realicen en el ámbito del control previo se establece en la ley, en el presente Reglamento, en las resoluciones de la Intervención General que se dicten conforme a lo establecido en el artículo 90.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y 27.2 de este Reglamento, y el desarrollo de los mismos se realizará conforme a las instrucciones y órdenes de servicio que puedan dictarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, que serán de aplicación obligatoria por todo el personal de la Intervención.

3. El alcance de los controles que se desarrollen en el ámbito del control financiero se determina en la ley, en el presente Reglamento, en los acuerdos del Consejo de Gobierno, en su caso, y en el Plan Anual de Control Financiero al que se refiere el artículo 93.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, o en los documentos de planificación cuando proceda, y dichos controles se desarrollarán conforme a las instrucciones que dicte para su aplicación la Intervención General y a los programas de trabajo que en cada caso se elaboren, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.3 de este Reglamento.

4. Si, durante la realización de una actuación de control, hubiera de alterarse el alcance previamente establecido, deberá modificarse el instrumento en el que dicho alcance estuviera plasmado, con las mismas formalidades cumplidas para su aprobación inicial.

CAPÍTULO II

Organización

SECCIÓN 1.ª ESTRUCTURA Y CARÁCTER DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Artículo 13. *La Intervención General de la Junta de Andalucía y su autonomía.*

La Intervención General de la Junta de Andalucía ejerce sus funciones de control interno, contabilidad pública y supervisión continua con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetos a sus potestades contables y de control. La autonomía respecto de las personas titulares de los órganos y entidades cuya gestión controlen la ostenta la persona titular de la Intervención General y quienes realizan funciones del ámbito competencial de ésta, sin perjuicio de las potestades de dirección y coordinación que le corresponden a aquella.

Artículo 14. *Estructura.*

1. La Intervención General de la Junta de Andalucía se estructura del modo siguiente:

a) Las Divisiones, en las que se estructuran los servicios centrales de la IGJA, –a las que se refiere el artículo 17 llevan a cabo las tareas generales y horizontales de dirección y coordinación de las funciones de control interno, contabilidad y supervisión continua, cuyo desarrollo se realiza a través de todo el personal dependiente de la Intervención General.

b) Las Intervenciones, a las que se refiere el artículo 18, realizan de forma descentralizada el ejercicio de las mencionadas funciones, que, de acuerdo con los criterios materiales, orgánicos o funcionales que se estimen más adecuados, les sean encomendados por la persona titular de la Intervención General.

2. Conforme establece el artículo 86.2 del TRLGHP, por razón de las necesidades del servicio, la persona titular de la Intervención General podrá asignar asuntos concretos o atribuir a las

personas funcionarias titulares de las Divisiones, los servicios de éstas y a las Intervenciones, el desempeño de las funciones que permitan el cumplimiento más eficiente de las mismas.

Artículo 15. Adscripción orgánica y dependencia funcional

1. Los puestos de trabajo de las personas titulares de las Divisiones, de las Intervenciones y de las Intervenciones Adjuntas, así como las jefaturas de sección o puestos análogos de dichas Intervenciones, pertenecerán, de igual modo que los servicios horizontales de la Intervención General, a la Consejería competente en materia de Hacienda y se integrarán en la relación de puestos de trabajo de la Intervención General.

2. El resto de los puestos de trabajo de las Intervenciones mencionadas en el apartado 1 podrán estar adscritos a las diferentes Consejerías y agencias, sin perjuicio de la dependencia funcional exclusiva de la Intervención General.

3. El personal que ocupe los puestos mencionados en el apartado 2, en el ejercicio de las funciones de su puesto de trabajo, deberá cumplir las instrucciones dictadas por la Intervención General, que deberá ser oída en las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que afecten a las diferentes Intervenciones y en los expedientes disciplinarios que puedan ser incoados contra dicho personal, antes de dictar resolución.

4. La persona titular de la Intervención General podrá dirigirse a los órganos competentes en materia de personal de las Consejerías y agencias, instando la adopción de las medidas de gestión de personal que se consideren necesarias para el adecuado desarrollo de las funciones encomendadas a la Intervención General.

SECCIÓN 2.ª LOS SERVICIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Artículo 16. La persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

1. La persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía tiene rango de titular de Viceconsejería. Su titular es nombrado y separado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, entre personas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 17.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. La persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía ostenta la dirección orgánica y funcional de todos los servicios, dependencias y personal funcionario adscrito a la Intervención General y desarrolla las funciones que le atribuyen las leyes, el presente Reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación.

Artículo 17. Las personas titulares de las direcciones de División.

1. Las tareas de coordinación general y dirección de las funciones de la Intervención General se realizará a través Divisiones, en función de los diferentes cometidos del órgano directivo. La persona titular de la Intervención General atribuirá la dirección de cada una de las Divisiones a una persona interventora directora de División.

2. Corresponde a las personas titulares de las respectivas Divisiones la dirección y coordinación del área funcional de la Intervención General que tengan encomendada, así como el reparto ordinario de asuntos entre el personal interventor y demás servicios que de ellos dependan.

Cuando sea necesaria la sustitución por ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de una dirección de División le sustituirá la persona que previamente haya sido designada al efecto por dicha persona titular.

3. La persona titular de la Intervención General designará de entre las personas titulares de División a quien deba sustituirle, en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En ausencia de designación expresa o en caso de ausencia o enfermedad de la persona designada, la sustitución corresponderá a la persona titular de la dirección de División con más antigüedad como tal.

SECCIÓN 3.ª LAS INTERVENCIONES

Artículo 18. *Las personas titulares de las Intervenciones.*

1. Los interventores o interventoras son personas funcionarias titulares de las Intervenciones que tienen asignadas la realización de las funciones a las que se refiere el artículo 1 de este Reglamento.

2. La persona titular de la Intervención General establecerá la asignación de funciones que deba realizarse por cada una de dichas Intervenciones y encomendará cuando sea necesario a la persona titular de una Intervención la coordinación de otras Intervenciones dentro de los ámbitos funcionales que tenga asignados, o cometidos concretos y no habituales correspondientes a ámbitos distintos de aquella distribución.

3. Las Intervenciones podrán contar bajo su dependencia con Intervenciones Adjuntas que actuarán bajo las directrices de aquellas, correspondiéndoles asimismo establecer el reparto de tareas entre ellas si tuvieran adscritas más de una.

4. Además de las Intervenciones Adjuntas, las Intervenciones contarán con la estructura de personal que se establezca en las respectivas relaciones de puestos de trabajo, sin perjuicio de que los puestos de jefatura de sección, o puesto análogo, conforme a lo establecido en el artículo 15, estén adscritos a la relación de puestos de trabajo de la Intervención General.

Artículo 19. *Sustitución de las personas titulares de las Intervenciones.*

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Intervención lo sustituirá la persona titular de la Intervención Adjunta.

2. Si no pudiera acudir al mecanismo de sustitución previsto en el apartado anterior, la persona titular de la Intervención General le acumulará las funciones temporalmente a otra persona titular de una Intervención.

CAPÍTULO III

El control previo

SECCIÓN 1.ª ASPECTOS GENERALES

Artículo 20. *Concepto y naturaleza.*

1. El control previo tiene por objeto, en los términos establecidos en el TRLGHP y en este Reglamento, el control de la legalidad de los actos, expedientes y operaciones, cualquiera que sea la forma jurídica mediante la que se instrumenten, de los que se deriven gastos u obligaciones de contenido económico.

2. El control previo se ejerce con anterioridad a la adopción de los actos o acuerdos sometidos a esta modalidad de control en los términos establecidos en este Reglamento y sin perjuicio de los mecanismos complementarios de control posterior o financiero que, conforme a lo previsto en artículo 89.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, estime necesario realizar la persona titular de la Intervención General.

3. En los supuestos en que el resultado del control previo se plasme en un informe desfavorable o nota de reparos, tendrá efectos suspensivos para la tramitación del expediente, en los términos previstos en este Reglamento.

4. Las actuaciones del control previo se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 94.2 del TRLGHP a las Consejerías y agencias administrativas, así como a las operaciones de las entidades sometidas a control financiero a que se refiere la Sección 4ª.

Artículo 21. *Actuaciones.*

El ejercicio del control previo comprende las siguientes actuaciones sobre los actos, expedientes, y operaciones que se relacionan:

- a) La fiscalización previa de los gastos y de las obligaciones de carácter presupuestario.
- b) Los informes previos de las modificaciones presupuestarias.
- c) El control previo de las operaciones a las que se refiere la sección 4ª de este capítulo.
- d) La comprobación material del gasto.

SECCIÓN 2.ª FISCALIZACIÓN PREVIA

Artículo 22. *Concepto y objeto de la fiscalización previa.*

1. La fiscalización previa consiste en el examen, antes de que se dicte la correspondiente resolución, de los expedientes de gasto que contienen actos o documentos susceptibles de producir gastos y obligaciones económicas, con el fin de verificar que su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad aplicable a los mismos, en los términos previstos en la ley y en este Reglamento.

2. Se entiende por expediente de gasto, a los efectos de este Reglamento, el que contiene una propuesta que tiene por objeto la ejecución de un crédito presupuestario a través de las fases de autorización y disposición de los gastos públicos y de contratación y pago de las obligaciones consecuentes, hasta la justificación de las mismas. No obstante lo dispuesto anteriormente, serán objeto de fiscalización las modificaciones de contratos, de encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados y de subvenciones, aunque no tengan repercusión presupuestaria.

Artículo 23. *Fases de la fiscalización previa.*

Serán objeto de fiscalización previa las fases de los expedientes de gasto correspondientes a los actos del procedimiento administrativo mediante el que se ejecutan los créditos presupuestarios, incluso si se tramitan de forma acumulada. Dichas fases son las que se relacionan a continuación:

- a) La autorización del gasto. La fiscalización consistirá en la verificación de que dicha autorización se realiza por órgano competente y que existe crédito adecuado y suficiente, así como de la legalidad de los trámites propios de la naturaleza del gasto que se autoriza.
- b) El compromiso o disposición de gasto. La fiscalización comprenderá la verificación del cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la selección del tercero con el que se compromete el crédito autorizado.
- c) El reconocimiento de la obligación, que lleva implícita la propuesta de pago. Se

comprobará que queda acreditado el legítimo derecho de la persona acreedora a la obligación reconocida y al pago propuesto.

d) La fiscalización de los pagos extrapresupuestarios, mediante la comprobación de la legitimidad de la persona acreedora, la existencia de saldo y la competencia del órgano proponente del pago

e) La justificación de los pagos de justificación posterior, que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para la justificación diferida de los pagos.

Artículo 24. *Competencias.*

La distribución de funciones para la fiscalización previa entre la persona titular de la Intervención General y las titulares de las Intervenciones, se establece del modo siguiente:

1. La persona titular de la Intervención General ejercerá la fiscalización previa en los supuestos siguientes:

a) En los actos que hayan de ser aprobados o autorizados por el Consejo de Gobierno y los que supongan una modificación de un contrato del sector público que haya fiscalizado la Intervención General.

La competencia de la Intervención General para la fiscalización de la aprobación del gasto se extenderá a la fase de compromiso cuando ambas fases deban gestionarse conjuntamente.

b) Le corresponderá asimismo la fiscalización de la fase de compromiso o disposición de aquellas subvenciones en las que deba aprobarse el gasto con anterioridad a la preceptiva convocatoria y cuya concesión deba ser autorizada por el Consejo de Gobierno.

Las fases de fiscalización posteriores a la efectuada por la Intervención General serán realizadas por la Intervención competente, a la que corresponderá asimismo la contabilización de todas las fases del expediente de gasto de que se trate.

2. Las personas titulares de las Intervenciones, sin otras excepciones que las enumeradas en el apartado anterior, ejercerán en toda su amplitud la fiscalización de los actos relativos a gastos y obligaciones que dicten los correspondientes órganos de las Consejerías, agencias administrativas, y Delegaciones Territoriales, Delegaciones del Gobierno o Delegaciones Provinciales y cuyo control previo tengan asignado.

En el supuesto de expedientes de gasto de contratación o convocatorias de subvenciones financiadas con créditos imputados a partidas presupuestarias cuya contabilización corresponda a distintas Intervenciones, la fiscalización la ejercerá la Intervención cuya competencia orgánica se corresponda con la del órgano de contratación o convocante, sin que ello suponga alterar las competencias en materia de contabilización, siempre que no hayan de ser autorizados por el Consejo de Gobierno.

Artículo 25. *Momento y plazo para la realización de la fiscalización previa.*

1. La Intervención recibirá el expediente de gasto con la propuesta del acto y toda la documentación que deba acompañarlo, según el alcance de la fiscalización, una vez emitidos, en su caso, los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano correspondiente.

2. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días contados desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma

cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente.

Cuando la documentación presentada esté incompleta no se iniciará el cómputo del plazo para el ejercicio de la fiscalización previa hasta la fecha de recepción del último documento, justificante e informe que deba aportarse, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones de Fiscalización.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la persona titular de la Intervención actuante tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales.

4. Cuando, en el ejercicio del control previo, la Intervención haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 6.3 se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo, y quedará obligada a dar cuenta de dicha circunstancia al órgano gestor.

Artículo 26. Remisión de expedientes, para su fiscalización, por medios electrónicos.

El expediente se presentará en formato electrónico, deberá constar de documentos originales o copias auténticas e incorporará las firmas electrónicas que garanticen la autenticidad, identidad del emisor e integridad e inalterabilidad del documento.

La Intervención General pondrá a disposición de los órganos gestores del gasto un portal de fiscalización que permita la recepción de toda clase de expedientes de gasto tramitados por medios electrónicos, que reúnan los requisitos técnicos y funcionales definidos por el citado centro directivo.

Artículo 27. Alcance de la fiscalización previa.

1. El objeto de la fiscalización previa es el establecido en el artículo 90.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y consiste en verificar que el contenido y tramitación de los expedientes de gasto se ajustan a la legalidad vigente en los términos previstos en la ley y en este Reglamento.

2. En uso de la habilitación establecida en el artículo 90.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la persona titular de la Intervención General podrá establecer, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que el objeto de comprobación en la fiscalización previa se realice mediante la verificación, en las distintas fases de la fiscalización previa, de los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga autorizar y contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado respecto a los mismos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

b) Que la autorización, el compromiso de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones se proponen al órgano competente. Se comprobará también la competencia del órgano que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

c) Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.

d) Aquellos otros extremos, que por su trascendencia en el proceso de gestión, determine la Intervención General en la referida resolución para cada una de las fases de fiscalización previa.

3. El resultado de la fiscalización previa, cualquiera que sea el alcance de aplicación a la misma, consiste en la emisión por la Intervención de un juicio, favorable o desfavorable, que se formulará exclusivamente, a la vista de la documentación que contenga el expediente aportado.

4. Cuando el expediente objeto de fiscalización, en cualquiera de sus fases, haya sido informado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o asesoría jurídica orgánicamente equivalente, la Intervención no se pronunciará sobre los extremos que se encuentren dentro del ámbito funcional de competencias del citado órgano de asesoramiento jurídico y hayan sido examinados por el informe jurídico que obre en el expediente.

5. Cuando el expediente de gasto, en cualquiera de sus fases, deba ser verificado por los servicios dependientes de la Dirección General de Fondos Europeos, de acuerdo con lo previsto en la normativa europea y nacional que resulte de aplicación, la Intervención, al fiscalizar, no se pronunciará sobre los aspectos de la elegibilidad de los gastos correspondientes que no estén comprendidos entre los requisitos de obligada comprobación en la fiscalización previa.

Artículo 28. Fiscalización previa de la justificación de los pagos de justificación posterior.

La fiscalización de las justificaciones de los pagos de justificación posterior consistirá en comprobar que el acreedor ha presentado los documentos acreditativos de la obligación contraída, de acuerdo con la naturaleza del gasto de que se trate.

No obstante, tratándose de subvenciones, se aplicarán lo dispuesto en el siguiente artículo.

Artículo 29. Reglas especiales de fiscalización en materia de subvenciones.

1. La persona titular de la Intervención General podrá acordar que la fiscalización del compromiso de gasto en subvenciones se limite a la comprobación de los extremos definidos en los párrafos a), b) y c) del artículo 27.2, y de aquellos otros que dicho órgano determine en atención a su trascendencia en el proceso de gestión, incluida la aportación de certificación expedida por el órgano instructor del procedimiento acreditativa de la comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para que las personas solicitantes puedan resultar beneficiarias, en los términos que se mencionan en el artículo 131 relativo al informe emitido por la Intervención General sobre los proyectos de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

2. La comprobación formal por parte del órgano concedente, de la adecuada justificación y de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión y disfrute de las subvenciones, deberá certificarse por aquél conforme al modelo que se apruebe por la persona titular de la Intervención General, a efectos de la fiscalización del reconocimiento de obligaciones de justificación previa y de las propuestas de justificación de los pagos de justificación posterior.

3. En los supuestos de reintegro de subvenciones, para la fiscalización de la justificación, el órgano concedente deberá emitir, conforme al modelo que se apruebe por la persona titular de la Intervención General, la certificación prevista en el artículo 1.4.c) del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior.

Artículo 30. La fiscalización por muestreo.

1. Se podrá establecer la fiscalización por muestreo a los gastos de personal, de subvenciones y cualesquiera otros en los que concurra la circunstancia de afectar a un gran número de actos, documentos o expedientes.

2. La fiscalización por muestreo se acordará por resolución de la persona titular de la Intervención General en la que, entre otros aspectos, se determinará lo siguiente:

a) El ámbito subjetivo, objetivo y temporal de la fiscalización por muestreo. En lo que se refiere a la eficacia temporal de la resolución, podrá establecerse la misma con carácter indefinido, mientras no sea objeto de modificación o supresión.

b) La forma y plazos en los que el órgano gestor deberá poner a disposición de la Intervención el universo de expedientes y la documentación de los integrantes de la muestra seleccionada.

c) El criterio objetivo de selección y el tamaño de la muestra.

d) El porcentaje de errores que obligará a ampliar la muestra o a fiscalizar la totalidad de la población, en su caso.

3. Una vez fiscalizada la muestra de expedientes con un índice de errores inferior al umbral que exija la ampliación de aquélla, se entenderán fiscalizados la totalidad de los integrantes de la población considerada.

Artículo 31. *Exclusión y sustitución de la fiscalización previa.*

1. No estarán sometidos a fiscalización previa aquellos gastos en relación a los cuales se establezca la exclusión de la misma de acuerdo con el artículo 90.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. En los procedimientos de gastos no sometidos a fiscalización previa, sólo estará excluida la fiscalización con carácter previo en las fases de autorización y de compromiso del gasto. No obstante, la exclusión a la que se refiere este artículo podrá extenderse para cualquiera de los supuestos del apartado anterior a todas las fases de la fiscalización previstas en el artículo 23, cuando se establezca en sustitución de la fiscalización previa el control financiero posterior al que se refiere el apartado siguiente.

3. La persona titular de la Intervención General podrá establecer los procedimientos de control posterior sobre los gastos excluidos de fiscalización previa e incluirá las actuaciones de tal naturaleza previstas en cada ejercicio en el Plan Anual de Control Financiero.

Artículo 32. *La fiscalización favorable.*

Cuando conforme a la verificación de los extremos a los que se extiende la fiscalización previa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 a 29, el expediente objeto de fiscalización se ajuste a la legalidad, será fiscalizado favorablemente. La fiscalización favorable se plasmará mediante la firma por la persona titular de la Intervención competente.

Artículo 33. *Los reparos y observaciones.*

1. Si la Intervención, al realizar la fiscalización, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos de forma motivada.

2. El reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado.

3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias advertidas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención, para su fiscalización.

4. Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, podrá iniciar el procedimiento de discrepancia descrito en el artículo siguiente.

5. En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen de fiscalización

previsto en el artículo 27.2, solo procederá la formulación de reparo cuando no se cumpla alguno de los extremos a que debe limitarse la comprobación que se hayan establecido para los respectivos gastos.

6. En caso de que el ámbito de comprobación de los aspectos de legalidad no esté previamente delimitado únicamente procederá la formulación de reparo en los casos siguientes:

a) Cuando no exista crédito presupuestario suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto que se proponga autorizar.

b) En los casos de falta de competencia del órgano al que se propone la aprobación del gasto o del que deba ostentarla en la relación jurídica subyacente.

c) Si no queda acreditada la legitimidad de la persona o entidad en cuyo favor se contrae el compromiso de gasto.

d) Si no se acredita documentalmente la efectiva realización de la prestación y el derecho de la persona acreedora.

e) En los supuestos en los que, siendo preceptiva la fiscalización previa de la autorización del gasto, se haya omitido este trámite.

En el supuesto previsto en este apartado, además de la emisión de reparo suspensivo como consecuencia de la comprobación de los extremos a que se refieren los párrafos a) a e) anteriores, las Intervenciones podrán formular las observaciones complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

Artículo 34. *Las discrepancias.*

1. Si el órgano al que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, podrá formular discrepancia y, en tal caso, se procederá de la siguiente forma:

a) Cuando haya sido formulado por una Intervención, corresponderá a la persona titular de la Intervención General conocer de la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla. A tal efecto, la persona titular de la Viceconsejería correspondiente, en el plazo de veinte días desde que se formuló el reparo, expondrá ante la Intervención General las razones de la discrepancia en escrito motivado, al que acompañará el expediente y cuantos documentos, antecedentes e informes considere oportuno para fundamentar su criterio.

b) Cuando el reparo emane de la persona titular de la Intervención General o ésta, previo planteamiento de la discrepancia por la persona titular de la Viceconsejería correspondiente, haya confirmado el de una Intervención, subsistiendo la discrepancia, corresponderá la resolución:

1º A la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, cuando el importe del gasto propuesto no exceda de 150.000 euros.

2º Al Consejo de Gobierno, en los demás casos.

2. Si la persona titular de la Consejería a la que pertenezca el órgano al que afecta el reparo acordara someter el expediente a la decisión del Consejo de Gobierno o de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, por existir discrepancia con la Intervención General, lo comunicará, con al menos cinco días de antelación a la celebración de la sesión del Consejo o de la Comisión en la que se conozca el asunto, a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, por conducto de la persona titular de la Intervención General, en unión de los informes y antecedentes relacionados con la discrepancia planteada.

Artículo 35. *La omisión de fiscalización.*

1. En los supuestos en los que se hubieran omitido las actuaciones de fiscalización previa de la autorización del gasto, no se podrá continuar el expediente de gasto ni, por tanto, reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2. Procederá la instrucción de un expediente de convalidación de gastos cuando concurren los siguientes requisitos:

3. Que el acto o expediente a que se refiera contenga un gasto realmente realizado, entendiéndose, a tal efecto, que el gasto se ha realizado cuando su autorización ha surtido efectos frente a terceros mediante la notificación o publicación oportuna o cuando de la actividad material de la Administración resulte la asunción del correspondiente compromiso de gasto.

4. Que el gasto no se encuentre excluido de fiscalización previa.

5. Que se haya omitido el trámite de fiscalización previa regulado en el artículo 23.a).

6. El acuerdo de convalidación de gastos previsto en este artículo tiene, como único efecto, subsanar la omisión del trámite de la fiscalización previa del acto o expediente. Como consecuencia de lo anterior, no podrán someterse a convalidación los actos o expedientes en los que, además de la omisión de la fiscalización previa, se haya incurrido en otros defectos, sin que éstos se hayan previamente subsanado.

7. Cuando la Intervención actuante conozca de un acto o expediente en el que se haya omitido la fiscalización previa lo manifestará así a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo un informe, en el que pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

8. Las razones por las que estima que se ha omitido la fiscalización previa.

9. Las infracciones de la legalidad económica, presupuestaria y contable que, en opinión de la Intervención actuante, se hayan producido en el momento en que se adoptó el acto sin fiscalización o intervención previa, así como el juicio, favorable o desfavorable, que el expediente le hubiera merecido, de haberse sometido a fiscalización en el momento procedimental oportuno.

10. Las prestaciones o gastos que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto.

El órgano gestor del expediente, a la vista del informe de la Intervención, actuará del modo siguiente:

a) Si el juicio sobre la fiscalización del expediente en el momento procedimental oportuno fuese favorable propondrá a la persona titular de la consejería su sometimiento al Consejo de Gobierno o a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, según que el gasto u obligación sea o no superior a 150.000 euros, para la convalidación del gasto.

b) Si el informe de la Intervención pusiera de manifiesto errores materiales o aritméticos u otras deficiencias fácilmente subsanables, con las que estuviera conforme el órgano gestor, actuará conforme dispone el apartado a) anterior, previo cumplimiento de las indicaciones contenidas en el informe de la intervención.

c) Si el informe de la Intervención pusiera de manifiesto infracciones sustantivas o formales que pudieran viciar el acto o expediente de nulidad o anulabilidad, el órgano gestor correspondiente solicitará dictamen de la Asesoría Jurídica.

11. La Asesoría Jurídica, en el plazo de diez días desde que se le remitan las actuaciones, emitirá informe en el que se pronunciará sobre todas las cuestiones que suscite el expediente y, necesariamente, sobre las posibilidades de subsanación de las infracciones producidas o el cauce que haya de seguirse para la satisfacción, en su caso, de la obligación a la persona o entidad interesada.

12. Cuando, a juicio de la Asesoría Jurídica, en el acto o expediente concurren

circunstancias de cualquier tipo que hagan inconveniente o imposible promover un expediente de convalidación, deberá aquella pronunciarse, cuando se le remitan las actuaciones para su dictamen, acerca de la posibilidad de resarcimiento al particular por la prestación efectuada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás preceptos concordantes, o por la vía que considere procedente, o si, por el contrario, no procede resarcimiento alguno por parte de la Administración.

13. Emitido el informe a que se refiere el apartado 4, pasarán las actuaciones al órgano gestor, el cual llevará a efecto las indicaciones que en el mismo se contengan o expondrá motivadamente las razones que, a su entender, autoricen el apartamiento del mismo, sometiendo el expediente a convalidación, si ésta fuera procedente, u ordenando, en su caso, la incoación del correspondiente procedimiento dirigido a resolver el posible resarcimiento al particular.

14. Si la persona titular de la consejería a la que pertenezca el órgano gestor del expediente acordara someter el asunto a la decisión del Consejo de Gobierno o de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, lo comunicará a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda, por conducto de la persona titular de la Intervención General, con cinco días de antelación a la reunión en que se conozca del asunto.

15. Al expediente se unirá una memoria que incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización previa y, en su caso, las observaciones que se estimen convenientes respecto del informe de la Intervención, así como el documento acreditativo de la reserva de crédito correspondiente.

16. Las personas titulares de la Intervención General o de las diferentes Intervenciones deberán dar cuenta a la persona titular de la Viceconsejería de cada departamento, de la Presidencia o Dirección de cada agencia, de todos los informes emitidos en los que se haya puesto de manifiesto la omisión de la fiscalización previa.

17. Las personas titulares de la Viceconsejería, o Presidencia o Dirección de la agencia practicarán la información que resulte necesaria, a fin de adoptar las medidas procedentes para impedir la reiteración de los hechos y corregir, en su caso, los comportamientos que los han ocasionado.

Artículo 36. Las resoluciones de fiscalización limitada previa.

Sin perjuicio de que la persona titular de la Intervención General, conforme a lo establecido en el artículo 6, ejerza sus facultades de dirección y coordinación en materia de fiscalización previa mediante la aprobación de instrucciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27.2, por resolución del citado órgano directivo se aprobarán aquellas en las que se establecerá el alcance y contenido de la fiscalización previa en sus distintas fases para los distintos tipos de expedientes de gasto.

Las resoluciones de fiscalización, serán aprobadas por la persona titular de la Intervención General y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

SECCIÓN 3.ª LOS INFORMES PREVIOS DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Artículo 37. Supuestos en los que procede y competencia.

1. La persona titular de la Intervención General informará previamente los expedientes de modificación presupuestaria cuya autorización compete al Consejo de Gobierno, así como las modificaciones presupuestarias en las que se incrementen los créditos relativos a las transferencias de financiación a las entidades previstas en el ámbito de aplicación de la Orden de la Consejería de

Hacienda y Administración Pública de 30 de abril de 2014, por la que se desarrollan los mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria.

2. Las personas titulares de las Intervenciones delegadas competentes informarán las transferencias de crédito que deban ser autorizadas por las personas titulares de las consejerías, agencias administrativas, de régimen especial, y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y consorcios comprendidos en el artículo 4 de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

3. El régimen de emisión de informes a las modificaciones presupuestarias contemplado en los apartados anteriores se aplicará en todo caso con independencia de la modalidad de control interno que resulte de aplicación al órgano que deba aprobarlas.

Artículo 38. Objeto y alcance del informe.

1. Los informes de Intervención a los expedientes de modificaciones presupuestarias tendrán por objeto verificar el cumplimiento de los preceptos previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente reguladores del régimen jurídico aplicable a las modificaciones de crédito.

2. En consecuencia, el alcance de estos informes se extiende a comprobar los siguientes extremos:

- a) La competencia del órgano para aprobar la modificación presupuestaria.
- b) Los supuestos de hecho habilitantes para su tramitación.
- c) Los mecanismos de financiación de cada figura de modificación presupuestaria.
- d) El procedimiento que deben seguir tales expedientes y los concretos informes que deben recabarse en cada caso.
- e) En el caso de las transferencias de crédito, el sistema de limitaciones de las mismas establecido en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

SECCIÓN 4.^a EL CONTROL PREVIO DE LAS ENTIDADES, SERVICIOS Y GASTOS SUJETOS A CONTROL FINANCIERO

Artículo 39. Alcance y efectos del control previo de la aprobación de gastos.

1. La Intervención General podrá establecer que se sometan a fiscalización previa operaciones individualizadas y concretas de un ámbito de gestión sometido a control financiero cuya importancia así lo aconseje, antes de que tales operaciones se formalicen o conciertan.

2. El alcance general básico de esta modalidad de control será fijado por resolución de la Intervención General que podrá remitirse a las que se aprueben en el ámbito de la fiscalización previa en relación a los extremos particulares a comprobar de los diferentes tipos de gastos en la modalidad de fiscalización limitada previa a la que se refiere el artículo 27.2.

3. El informe de control que se emita será favorable o desfavorable, según resulte de la aplicación de las normas análogas correspondientes a la fiscalización previa previstas en los artículos 32 y 33 emitiéndose el citado informe en los mismos términos y con los efectos suspensivos que determinan las reglas establecidas en el artículo 33.

4. Si la entidad sujeta a control se mostrara en desacuerdo con el criterio plasmado en el informe, podrá discrepar del mismo, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 34.

5. Cuando la entidad que deba someter el gasto a control previo tenga la consideración de Administración Pública y omita dicho trámite preceptivo o desatienda un informe desfavorable con carácter suspensivo emitido al amparo de lo dispuesto en esta sección resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 35. Por el contrario, cuando la entidad no tenga la consideración de Administración Pública se realizará la comunicación especial a la que se refiere el artículo 74.2.

Artículo 40. Alcance y efectos de la comprobación material del gasto.

Cuando así se considere necesario, y para los supuestos que se establezcan mediante resolución de la persona titular de la Intervención General, podrá establecerse como una modalidad de control previo aplicable al ámbito de gestión sometido a control financiero permanente la de la comprobación material del gasto en los contratos que se celebren en dicho ámbito. El resultado desfavorable de esta comprobación material tendrá efectos suspensivos, que se desarrollarán en los términos que establezca la mencionada resolución.

Artículo 41. Competencias.

Será competente para emitir este tipo de informes la persona que tenga atribuidas las funciones de control financiero en la entidad de que se trate.

SECCIÓN 5.ª LA COMPROBACIÓN MATERIAL DEL GASTO

Artículo 42. Objeto y finalidad.

1. La comprobación material del gasto es la facultad de la Intervención de verificar materialmente, antes del reconocimiento de la obligación, la efectiva realización de las obras, las adquisiciones de bienes y las prestaciones de servicios financiadas con fondos públicos. La función a la que se refiere el artículo 92.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se desarrollará mediante la concurrencia de una persona en representación de la Intervención General a los actos formales de recepción de los contratos celebrados en el ámbito de la gestión sometida a la modalidad de control previo, en cuyo transcurso deberá constatarse la adecuación sustancial de las obras y adquisiciones al contenido del correspondiente contrato o documentación técnica pertinente.

2. La función descrita en el apartado anterior se desarrollará asimismo, en los términos previstos en esta sección, en los siguientes casos:

a) Cuando por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, en el acto por el que se produzca dicha ocupación, aún sin el carácter de acto formal de recepción.

b) En la recepción de las obras, servicios o suministros llevadas a cabo para atajar las situaciones de emergencia, de acuerdo con el procedimiento especial previsto en la legislación de contratos.

c) En los supuestos de resoluciones contractuales, en el acto formal en el que se cuantifiquen las unidades de obra, los suministros o servicios efectivamente ejecutados, cuya constatación y valoración hayan de servir de base a la liquidación del contrato que, en su caso, proceda.

Artículo 43. Supuesto de designación de representante y actuación en la comprobación material del gasto.

1. Conforme al artículo 92.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, los supuestos en los que resultará preceptivo solicitar a la Intervención General la designación de una persona representante para que asista al acto de recepción, así como los supuestos en que será preceptiva su concurrencia al mismo, serán establecidos por la Consejería competente en materia de hacienda.

2. Asimismo, por orden de la misma Consejería mediante la que se desarrollará el presente Reglamento, se establecerán los términos del desarrollo de la función de comprobación material de la inversión en los actos formales de recepción, así como los que regirán el pronunciamiento de la persona de Intervención actuante en el acta que ha de suscribirse.

Artículo 44. La persona representante de la Intervención General.

La intervención de la comprobación material se realizará por la persona representante de la Intervención General, designada por su titular entre el personal funcionario adscrito al centro directivo, que lo podrá hacer, tanto particularmente para un gasto determinado, como con carácter general y permanente para todos aquellos que afecten a una consejería, centro directivo, organismo o provincia en que se realice la función, o para la comprobación de un tipo o clase de gasto.

Artículo 45. El asesoramiento de la persona que representa a la Intervención General.

1. Cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material, la persona representante de la Intervención General será asistido por personal funcionario u de empleo público, de la especialidad a que corresponda la prestación o servicio.

2. La designación del personal asesor se efectuará por la persona titular de la Intervención General entre quienes no hayan intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, celebración o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible, dependientes de distinta consejería, centro directivo u organismo, de aquél al que la comprobación se refiera o, al menos, de centro directivo u organismo que no haya intervenido en su gestión, realización o dirección. Cuando no pueda disponerse de personal técnico con la titulación exigida para verificar la inversión que esté adscrito a la relación de puestos de trabajo de la provincia en la que debe realizarse la comprobación, por la Intervención General podrá designarse personal dependiente de servicios periféricos o centrales de provincia distinta de aquella.

3. Todos los órganos de la Junta de Andalucía estarán obligados a colaborar con la Intervención General facilitando y actualizando la relación de personal técnico facultativo que de ellos dependan para que puedan ser designados por ésta para su asistencia a los actos de recepción en los que puedan ser requeridos.

4. La realización de la labor de asesoramiento en la comprobación material del gasto por el personal asesor a que se refiere este artículo, se considerará parte integrante de las funciones del puesto de trabajo en el que estén destinados, resultando preceptiva su asistencia cuando resulte designado y debiendo colaborar los superiores jerárquicos de los mismos en la adecuada prestación de este servicio.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, la persona titular de la Intervención General podrá acudir cuando así se justifique a la contratación de profesionales

externos, para la prestación de asesoramiento de quienes realicen la comprobación material del gasto.

Artículo 46. Acta de recepción.

1. El pronunciamiento de la persona representante de la Intervención sobre el resultado de los actos de recepción se plasmará en un acta levantada a tal efecto, que deberá ser suscrita por las personas que asistan a dicho acto.

En la misma se hará constar el resultado de la comprobación, las deficiencias apreciadas, en su caso, las medidas a adoptar para subsanarlas, y otros hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el acto de recepción.

2. Cuando la persona representante de la Intervención aprecie la existencia de una modificación del contrato no sometida a fiscalización previa, o que existen trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y distribuidos en el momento de efectuar la comprobación material del gasto, reflejará en el acta esta circunstancia, e indicará en la misma la necesidad de seguir el procedimiento previsto en el apartado 8 del artículo 90 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía para la convalidación de la omisión de la fiscalización previa.

3. En aquellos supuestos en los que la persona representante la Intervención General emita informe desfavorable podrá el órgano de contratación suscribir acta de discrepancia. En este caso, los efectos del acto negativo de recepción quedarán condicionados a la resolución, en su caso, de la discrepancia, mediante el procedimiento previsto en el artículo 34.

Artículo 47. Efectos de la comprobación.

La Intervención competente para la fiscalización del gasto correspondiente al contrato, en su fase de reconocimiento de obligación y propuesta de pago deberá comprobar que, junto a la documentación preceptiva del referido pago o documentación justificativa, se aporta la pertinente acta de recepción positiva. En caso contrario, procederá a emitir reparo con efectos suspensivos.

En idéntico sentido habrá de actuarse si se apreciara que se ha omitido el trámite de solicitar de la Intervención General representante para el acto de recepción siendo preceptiva dicha solicitud, cuando no se hubiese convocado en tiempo y forma a la persona que la representa para asistir a la recepción, o cuando se aportase al expediente acta de recepción contradictoria sin que haya sido resuelto el correspondiente procedimiento de discrepancia.

Artículo 48. Responsabilidad de la persona representante de la Intervención y de su personal asesor.

1. La responsabilidad de la persona representante de la Intervención General y, en su caso, del personal asesor que hayan sido designado, se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación. Dicha responsabilidad no alcanzará a aquellos defectos o faltas de adecuación del gasto realizado que no den lugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos, difíciles de detectar en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión.

2. En los supuestos en los que no se haya designado personal asesor técnico, por no considerarlo necesario o resultar imposible, la responsabilidad exigible a la persona representante designada quedará limitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida al funcionamiento de la Administración que no requieren una cualificación

técnica en un sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

CAPÍTULO IV

El control de los gastos de personal

Artículo 49. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones previstas en el presente capítulo resultarán de aplicación al control de los gastos que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones del personal que presta sus servicios en la Administración de la Junta de Andalucía, en sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. A los gastos del personal que no esté incluido en el presente Capítulo les será de aplicación el sistema de control de la entidad en la que presten sus servicios.

Artículo 50. Personal de consejerías y agencias administrativas.

1. El control de los gastos que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones del personal que presta sus servicios en las consejerías y las agencias administrativas, con independencia del régimen de control al que se sometan el resto de los gastos presupuestarios del servicio o agencia administrativa, se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la sección 2ª del Capítulo III de este Reglamento, en todo lo que no resulte incompatible con cuanto se dispone en los artículos siguientes, en las condiciones que se establezcan en una orden de la Consejería competente en materia de hacienda.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior al control de los gastos del personal al servicio de la Administración de Justicia que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones, le resultará de aplicación lo previsto en su normativa específica.

Artículo 51. Personal de agencias de régimen especial.

1. El control de los gastos que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones del personal que presta sus servicios en las agencias de régimen especial, con independencia del régimen de control al que se sometan el resto de los gastos presupuestarios de la agencia, se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la sección 2ª del Capítulo III, en todo lo que no resulte incompatible con cuanto se dispone en los artículos siguientes, en las condiciones que se establezcan en una orden de la Consejería competente en materia de hacienda.

2. Los gastos que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones del personal laboral del catálogo propio de la agencia, no integrado en la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía, estarán sometidos a control financiero permanente, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4, del artículo 94 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 52. Personal de agencias públicas empresariales.

Los gastos que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones del personal que presta

sus servicios en las agencias públicas empresariales, estarán sometidos a control financiero o control financiero permanente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 93 y 94 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 53. Tablas retributivas.

Las tablas de contenido económico, que constituyen la plasmación de los conceptos retributivos y de los descuentos de general aplicación con sus correspondientes importes según la normativa vigente, y que determinan el cálculo de las retribuciones del personal que presta sus servicios en las consejerías y agencias, se someterán a la modalidad de control que corresponda de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores.

La Intervención General fiscalizará regularmente, con carácter previo a su operatividad, las tablas de contenido económico de la aplicación SIRHUS, Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía.

Artículo 54. Control de actos y variaciones de contenido económico.

1. Con carácter general, los actos o acuerdos en materia de personal de los que deriven obligaciones de contenido económico, así como las incidencias que impliquen variación en la nómina de retribuciones, serán objeto de control posterior conforme a lo dispuesto en el artículo 56.

2. Los actos o acuerdos en materia de personal distintos de los contemplados en el apartado anterior, de los que deriven obligaciones de contenido económico se fiscalizarán previamente a la adopción de los mismos en los supuestos que prevea la orden a la que se refiere el artículo 50.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, mediante resolución de la persona titular de la Intervención General se podrá decidir la aplicación del control previo sobre las variaciones de la nómina o determinada tipología de las mismas, así como respecto de uno o varios órganos gestores. Dichas variaciones en la nómina de retribuciones se fiscalizarán con posterioridad a la adopción de los correspondientes actos y en el momento de su inclusión en ella mediante la aplicación de las técnicas de muestreo que acuerde la persona titular de la Intervención General estableciendo los oportunos mecanismos de selección, identificación y tratamiento de la muestra.

Los actos e incidencias sometidos a fiscalización previa no podrán continuar el proceso para su inclusión en las nóminas mientras no sean fiscalizados favorablemente o formen parte de un universo al que se haya dado conformidad mediante técnicas de muestreo.

Artículo 55. Fiscalización del reconocimiento de la obligación.

Para la fiscalización del reconocimiento de las obligaciones relativas a los gastos de personal serán de aplicación las normas generales establecidas en este Reglamento y en concreto se comprobará que la obligación responde a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados previamente con carácter favorable y que el reconocimiento de la obligación se realiza por el órgano competente

Artículo 56. Control posterior de la nómina.

1. El control posterior se efectuará sobre las nóminas ya satisfechas y se ejercerá por las Intervenciones competentes aplicando técnicas de muestreo conforme a los procedimientos que establezca la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

2. El citado control posterior de las nóminas se plasmará en la emisión de informes en los

que la persona titular de la Intervención competente podrá aceptar la nómina o formular observaciones respecto de la misma, las cuales se trasladarán al órgano gestor. Frente a dichas observaciones, el órgano gestor podrá conformarse, subsanando las deficiencias manifestadas, o formular discrepancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a aquél en que haya recibido la observación.

3. Una vez resuelta la discrepancia por el órgano competente, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en este Reglamento, manteniendo el criterio de la Intervención, o transcurrido el plazo de diez días sin presentación de alegaciones por el órgano gestor, si la Intervención competente hubiese observado la inclusión indebida en la nómina de un concepto de devengo periódico, o por importe incorrecto, cuyo mantenimiento pudiera dar lugar a pagos indebidos, podrá suspender la inclusión del mencionado concepto en la formación de una nueva nómina, sin perjuicio de que se inicien, en su caso, por el órgano correspondiente los procedimientos de revisión de los actos administrativos que proceda.

4. Sin perjuicio de los controles posteriores previstos en los apartados anteriores, la persona titular de la Intervención General podrá establecer la aplicación del control financiero previsto en el artículo 89.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, a los gastos de personal respecto de los que considere que resulta conveniente.

CAPÍTULO V

El control financiero. Aspectos generales

Artículo 57. Concepto y naturaleza.

1. El control financiero es una de los dos modalidades mediante las que se desarrolla la función de control interno caracterizándose por llevarse a cabo con posterioridad a la realización de la actividad objeto de control y por la utilización de técnicas de auditoría.

2. El control financiero tiene como fin general comprobar el correcto y eficiente funcionamiento de la utilización de los recursos públicos y la mejora de la gestión económica, presupuestaria y financiera de las entidades sometidas a esta modalidad de control.

3. El control financiero podrá instrumentarse en:

a) Auditorías de cumplimiento, para verificar que actos, operaciones y procedimientos de gestión se desarrollan de conformidad con las normas de aplicación.

b) Financieras, que verifican que la contabilidad, y los informes de gestión, expresan fielmente la situación patrimonial y el resultado de la gestión.

c) Operativas, cuyo objeto es verificar que los procedimientos aplicados aseguran de manera razonable la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos.

d) De programas, para la verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto.

4. Asimismo, el control financiero podrá realizar auditorías de sistemas de información mediante los que se comprobará que las funciones y operaciones que realizan garantizan los principios de fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad.

5. Los resultados del control, sin perjuicio de otro contenido propio de cada tipo de control, darán lugar a recomendaciones destinadas al órgano o entidad controlada.

Artículo 58. Supuestos de aplicación del control financiero.

El control financiero se aplicará, con las particularidades que se establecen en este Reglamento, en los siguientes ámbitos

- a) El control financiero del sector público.
- b) El control financiero de subvenciones.
- c) El control financiero de los gastos cofinanciados con la Unión Europea.

Artículo 59. El control financiero de las Universidades públicas andaluzas.

1. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, sobre el control financiero de las entidades no pertenecientes al sector público andaluz que tengan una financiación mayoritaria de la Junta de Andalucía, y al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, la Intervención General de la Junta de Andalucía, oído el Consejo Andaluz de Universidades, podrá realizar las actuaciones de control financiero que se estimen necesarias para el seguimiento de la aplicación por las Universidades de los recursos aportados por la Junta de Andalucía dentro del modelo de financiación vigente en cada momento, incluyendo las transferencias de asignación nominativa a favor de las Universidades previstas en las leyes anuales del Presupuesto.

Los informes definitivos de estos controles financieros se remitirán al Consejo Andaluz de Universidades, así como a las personas titulares de las Consejerías competentes en materia de hacienda, y en materia de universidades.

2. Para la realización de los controles financieros previstos en el apartado anterior, que se incluirán en el Plan Anual de Control Financiero regulado en el siguiente artículo, se tendrán en cuenta los artículos contenidos en los Capítulos V y VI de este Reglamento, con excepción del relativo a los informes de actuación.

Artículo 60. El Plan Anual de Control Financiero.

1. En el primer mes de cada ejercicio se aprobará, mediante resolución de la persona titular de la Intervención General, el Plan Anual de Control Financiero, comprensivo de todas las actuaciones de control financiero del sector público, de subvenciones y de fondos europeos, y otras actuaciones de control financiero que se vayan a llevar a cabo en el ejercicio, detallando el alcance subjetivo y temporal específico de cada una de ellas. El alcance objetivo de cada control se definirá en la forma prevista en este Reglamento.

2. El Plan Anual podrá ser modificado cuando existan circunstancias que así lo justifiquen.

3. El Plan Anual será comunicado a la Cámara de Cuentas de Andalucía, con la finalidad de que puedan coordinarse las actuaciones de ambos órganos de control.

Artículo 61. Informes generales de control.

La Intervención General presentará anualmente al Consejo de Gobierno, por conducto de la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda, un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del Plan Anual de Control Financiero de cada ejercicio, haciendo especial referencia a los resultados de los informes emitidos en el ámbito de control financiero permanente.

El informe incluirá información sobre la situación del seguimiento de las recomendaciones efectuadas en los respectivos informes por parte de los destinatarios de los informes, incluyendo asimismo cualquier otra información que se considere conveniente poner de manifiesto.

Artículo 62. Órganos competentes.

1. El control financiero se realizará por la Intervención General a través de las Intervenciones a las que se asigne cada actuación, que dirigirán los trabajos y tendrán a su cargo la planificación, ordenación y revisión de los mismos y la coordinación del equipo de trabajo.

2. En caso de insuficiencia de medios, podrán ejecutarse controles con la colaboración de firmas externas de auditoría contratadas. En tal supuesto, la dirección de los trabajos corresponderá a la Intervención que sea competente para la realización del control financiero por designación de la persona titular de la Intervención General. A dicha Intervención competente corresponderá centralizar, revisar y aprobar los trabajos realizados y suscribir los informes provisionales y definitivos.

El personal auditor que participe en los trabajos, bien individualmente o formando parte de equipos de auditoría, debe poseer la cualificación profesional necesaria, mantener una posición de independencia y objetividad, actuar con la debida diligencia profesional, responder de su trabajo y observar confidencialidad acerca de la información obtenida en el curso de las actuaciones.

Artículo 63. Asesoramiento técnico y facultativo.

Cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos específicos en el desarrollo del control financiero, podrá incorporarse al equipo de control una persona asesora de la Intervención actuante que se designará de la forma prevista en el artículo 45.

Como resultado de dicho asesoramiento, se emitirá un informe en el que se describa el alcance de las comprobaciones realizadas y su resultado.

Artículo 64. Planificación y desarrollo de los trabajos.

1. El control financiero se realizará, a excepción de los trabajos de control financiero sometido a normativa específica de la Comisión Europea, siguiendo las directrices de la Intervención General y en las normas que resulten de aplicación, en los plazos o periodos que la trascendencia de la operación u operaciones a controlar y de la entidad sujeta al mismo hagan aconsejable.

2. La planificación y desarrollo de los trabajos de control financiero se efectuará, en todo lo que no esté previsto en este Reglamento, con sujeción a lo dispuesto en las instrucciones que al efecto se establezcan por la persona titular de la Intervención General y, en su defecto, en las Normas de Auditoría del Sector Público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado.

3. Para la ejecución de las actuaciones de control se aplicarán los programas de trabajo elaborados al efecto, mediante los que se desarrollarán los objetivos de control que se persiguen, así como las tareas y procedimientos que se establezcan como más idóneos en cada caso.

4. Los papeles de trabajo serán custodiados por la Intervención actuante durante un plazo de cinco años, salvo que una norma sectorial establezca otro diferente.

Artículo 65. Informes de control financiero.

1. El control financiero se realiza mediante un procedimiento contradictorio, que consignará

sus resultados en un informe provisional, emitiéndose, tras la valoración de las alegaciones a las que se refiere el apartado siguiente, el informe definitivo. Los informes elaborados serán firmados por la persona titular de la Intervención que haya realizado el trabajo.

2. El informe provisional se remitirá a los destinatarios para que puedan formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo que, en función del tipo de control financiero, se establece en este Reglamento. Por causas que resulten justificadas, la Intervención actuante, a solicitud del órgano gestor, podrá conceder una prórroga por un plazo como máximo igual al que inicialmente corresponda.

3. Transcurrido el referido plazo, y, una vez analizadas las alegaciones presentadas, en su caso, la Intervención actuante emitirá el informe definitivo. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado, el informe provisional se elevará a definitivo.

4. El informe definitivo incluirá las alegaciones presentadas y los motivos de las no admitidas por la Intervención actuante.

5. Si como resultado del trabajo realizado no se detectan errores o incumplimientos se podrá emitir el informe definitivo sin que sea necesario cumplir con el trámite de alegaciones.

6. La persona titular de la Intervención General dará traslado de los informes definitivos al órgano, servicio o ente que haya sido objeto del control, así como a la persona titular de la Consejería de la que dependan, cuando proceda, además de otros posibles destinatarios propios del tipo de control financiero a que correspondan.

Artículo 66. *Tipos de opinión.*

1. En función de la opinión con que deben concluir los informes, estos se pueden clasificar en los siguientes tipos:

a) De opinión no modificada cuando concluyan que la actividad de la entidad ha sido llevada a cabo, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco normativo aplicable

b) De opinión modificada, cuando concluyan, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, que la actividad de la entidad en su conjunto no está libre de incorrección material o no se haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que la actividad de la entidad en su conjunto está libre de incorrección material.

2. Los tipos de opinión modificada son los siguientes:

2.1 Opinión con salvedades.

La persona interventora expresará una opinión con salvedades cuando:

a) habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada en la actuación objeto de control, son materiales, pero no generalizadas.

b) no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre la actuación objeto de control de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizados.

2.2 Opinión desfavorable.

La persona interventora expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales y generalizadas en la actuación objeto de control.

2.3 Denegación de opinión:

a) La persona interventora denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre

la actuación objeto de control de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados.

b) También denegará la opinión cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible emitir una opinión sobre la actuación objeto de control debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en el ámbito del control.

CAPÍTULO VI

El control financiero del sector público

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 67. Objeto y finalidad.

1. El control financiero del sector público es un control posterior que tiene por objeto comprobar que su funcionamiento, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y de buena gestión financiera.

2. El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de la gestión económico-financiera, a través de recomendaciones en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, presupuestarios y procedimentales para corregir las actuaciones que lo requieran.

3. El control financiero del sector público se desarrollará en la modalidad de control financiero permanente o en la de control financiero no permanente a las que se refieren las Secciones 2ª y 3ª de este capítulo.

Artículo 68. Tipos de control financiero del sector público.

1. En función de los objetivos particulares, el control financiero del sector público podrá consistir en:

a) Auditoría de cumplimiento, que consistirá en verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que les sean de aplicación.

b) Auditoría financiera, que consistirá en verificar que la contabilidad, en general, y las cuentas anuales, estados y demás informes de gestión, en particular, expresan fielmente la situación patrimonial y el resultado de la gestión de acuerdo con las normas y principios contables que sean de aplicación.

c) Auditoría operativa, que consistirá en verificar que los procedimientos aplicados aseguran de manera razonable el cumplimiento de la normativa aplicable y la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos.

d) Auditoría de programas, que consistirá en verificar que los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aplicados por los servicios o entidades sometidas a control aseguran una adecuada calidad en los informes emitidos sobre consecución de objetivos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto.

e) La revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-financiera, que abarcará el examen de las funciones y operaciones efectuadas en éstos, con el objeto de verificar que la

información responde a los principios de fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad, así como el correcto desarrollo de los procedimientos electrónicos que los mismos sustentan.

La Intervención General, en atención a las características especiales de las entidades sometidas a control, podrá decidir que se realicen otros tipos de auditoría.

2. Asimismo en las consejerías, agencias administrativas y de régimen especial, y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, la Intervención General realizará la verificación, mediante técnicas de auditoría de que los datos e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable refleja razonablemente las operaciones derivadas de su actividad.

Artículo 69. Ámbito de aplicación.

1. El control financiero del sector público en sus distintas modalidades, sin perjuicio de lo establecido en la sección 4ª del Capítulo III, se ejercerá sobre la gestión económico financiera de las agencias de régimen especial, las agencias públicas empresariales, las sociedades mercantiles del sector público andaluz, los consorcios, las fundaciones, así como sobre los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 5.5 del del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. Podrán, asimismo, someterse a control financiero los gastos, organismos o servicios de las consejerías y agencias administrativas cuando así se establezca por el Consejo de Gobierno.

3. Están sometidos igualmente al control financiero los ingresos del Presupuesto de la Junta de Andalucía.

Artículo 70. Informes de control financiero del sector público.

1. Las actuaciones de control financiero se plasmarán en informes comprensivos de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones alcanzadas y formularán las recomendaciones que se consideren necesarias para corregir las actuaciones que lo requieran. Los informes tendrán la estructura y tramitación que establezca la Intervención General.

2. Además de al órgano o entidad sometida a control financiero, a la Consejería de la que dependan y a aquellas otras entidades a las que se considere responsable de salvedades de especial relevancia, los informes definitivos de control financiero del sector público se remitirán a la Consejería competente en materia de hacienda, con el fin de proporcionar información relevante para el ejercicio de sus competencias relativas al control de eficacia, a las que se refiere el artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 71. Recomendaciones.

1. Las recomendaciones incluidas en los informes de control financiero irán destinadas a la mejora de la actuación de las técnicas y procedimientos de la gestión económico-financiera, así como a la corrección, en la medida de lo posible, de las actuaciones que lo requieran.

2. Deberán diferenciarse en el informe las recomendaciones de especial relevancia, referidas a aquellas salvedades identificadas como tales en el informe, y cuya inobservancia durante un plazo de seis meses podrá dar lugar a la emisión de un informe de actuación, de otras recomendaciones dirigidas a una potencial mejora en el funcionamiento y en las operaciones de la entidad.

3. Cuando se detecten incumplimientos significativos o debilidades en los sistemas de control de la entidad objeto de control, se efectuarán las recomendaciones oportunas para mejorar los controles internos o para asegurar el cumplimiento de la normativa.

Artículo 72. Seguimiento de recomendaciones y su evaluación por la Intervención actuante.

1. Una vez recibidos los informes definitivos de control financiero, las entidades sometidas a esta modalidad de control habrán de presentar, en el plazo de seis meses, ante sus órganos superiores de administración, un informe sobre el grado de implantación de las recomendaciones propuestas en los citados informes. De dicho informe, una vez aprobado por el órgano superior de administración, se dará traslado a la Consejería de la que dependa la entidad controlada y a la intervención actuante.

2. La Intervención actuante evaluará el informe de seguimiento de recomendaciones al que se refiere el apartado 1, remitiendo dicha valoración a los destinatarios del informe definitivo. En el caso de las entidades sometidas a control financiero permanente dicha valoración se efectuará con ocasión del siguiente informe que se emita.

Artículo 73. Informe de actuación.

1. La persona titular de la Intervención General emitirá un informe de actuación, a propuesta motivada de la Intervención actuante, cuando no se adopten por la entidad objeto del control las recomendaciones incluidas en los informes definitivos de control financiero, siempre que concurren todas y cada una de las siguientes circunstancias:

1) Que se trate de recomendaciones derivadas de salvedades de especial relevancia a juicio de la Intervención actuante, y con graves efectos negativos.

2) Que se puedan adoptar medidas concretas de corrección para subsanar las deficiencias observadas. Para el caso en que la salvedad de especial relevancia en un acto determinado tenga su causa en un vicio de procedimiento, se entenderá que pueden ser adoptadas medidas de corrección si, aun no pudiendo repararse la salvedad individual, sí puede serlo el procedimiento aplicado.

3) Que la entidad objeto de control tenga competencia para adoptar las medidas correctoras.

4) Que la responsabilidad de la salvedad que da lugar a la emisión del informe de actuación sea imputable a la entidad objeto de control.

2. Se emitirá asimismo informe de actuación cuando en el desarrollo de las actuaciones de control financiero o control financiero permanente se pongan de manifiesto salvedades de especial relevancia cuya responsabilidad corresponda a una entidad distinta de la que es objeto del control.

3. Los informes de actuación, que detallarán las salvedades detectadas y propondrán medidas correctoras, dando un plazo de seis meses para su implantación, se dirigirán a la persona titular de la Consejería a la que esté adscrita la entidad controlada, o a la entidad responsable de las salvedades en el caso previsto en el apartado anterior para que, en el plazo de quince días, manifiesten su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo, así como a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda. Por causas que resulten justificadas, la persona titular de la Intervención General podrá conceder una prórroga por un plazo como máximo igual al que inicialmente corresponda.

4. En caso de conformidad, los responsables de la gestión de las respectivas entidades darán cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de actuación.

5. Si, por el contrario, existiera disconformidad, la persona titular de la entidad a la que se ha dirigido el informe de actuación solicitará a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda, que, previo informe de la Intervención General, someta las actuaciones a la consideración del Consejo de Gobierno para que resuelva lo procedente.

6. La Intervención General realizará durante el ejercicio siguiente el seguimiento de las

medidas correctoras acordadas en su caso por el Consejo de Gobierno como consecuencia de los informes de actuación dando cuenta al mismo del resultado de dicho seguimiento.

7. Si la persona titular de la Consejería de la que dependa la entidad controlada a la que se ha dirigido el informe de actuación no manifestara conformidad o disconformidad, o habiendo manifestado la primera no diera cumplimiento a las recomendaciones, la persona titular de la Intervención General lo pondrá en conocimiento de la Consejería competente en materia de hacienda para que actúe en la misma forma prevista para la disconformidad.

8. Cuando en el momento de la concurrencia de los supuestos de emisión del informe de actuación a que se refiere el presente artículo, o, en los supuestos previstos en el apartado 7 anterior, la Intervención actuante apreciara también la concurrencia de los hechos a que se refiere el apartado 3 del artículo 10 del presente Reglamento, emitirá asimismo el informe al que se refiere el apartado 3 del mismo.

Artículo 74. Comunicaciones especiales

1. Procederá la emisión de una comunicación especial, en relación con lo previsto en el artículo 93.5 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, cuando en el marco de la realización de un control financiero la entidad no preste su colaboración a la Intervención actuante, o no le suministre la información requerida en los plazos establecidos, teniendo como consecuencia una denegación de opinión. Tal circunstancia se pondrá en conocimiento de la persona titular de la Consejería de adscripción, así como de la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda, para que por éstas se adopten las medidas oportunas.

2. Se emitirá asimismo una comunicación especial cuando, en el control financiero de entidades que no estén sometidas al régimen de contabilidad presupuestaria, se detecte la existencia de una infracción en materia de gestión económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como consecuencia de la omisión, siendo preceptivo, del trámite de control previo. De dicha comunicación se dará traslado también al Consejo de Gobierno cuando el gasto aprobado correspondiera a la competencia del mismo y se haya realizado sin su autorización.

Artículo 75. Contratación de auditorías.

La contratación de auditorías y controles que no formen parte de los cometidos de control financiero atribuidos a la Intervención General se regirá por las siguientes reglas conforme a lo establecido en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía:

a) La Consejería competente en materia de hacienda ostenta la competencia para contratar cualesquiera auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial, sobre las agencias públicas empresariales del artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y sobre los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Asimismo le corresponde la competencia para la contratación de la auditoría de los estados financieros sobre las agencias públicas empresariales del artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las sociedades mercantiles del sector público andaluz sometidas a control financiero permanente.

c) Para la contratación de auditorías distintas de las de estados financieros, las agencias

públicas empresariales del artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las sociedades mercantiles del sector público andaluz sometidas a control financiero permanente requerirán del previo informe de la persona titular de la Intervención General.

d) Las auditorías que contraten las agencias públicas empresariales del artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y sociedades mercantiles del sector público andaluz no sometidas a control financiero permanente, incluso aquellas que resulten obligatorias por la legislación mercantil, y las fundaciones del sector público andaluz no obligadas a auditarse por su normativa específica, deberán recabar de la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía informe con carácter previo a la contratación.

e) Requerirán asimismo informe de la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía, con carácter previo a la contratación, las auditorías distintas a las de cuentas anuales de las fundaciones del sector público andaluz obligadas a auditarse y los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

SECCIÓN 2.ª CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

Artículo 76. *Concepto y competencia.*

El control financiero permanente es una modalidad del control financiero del sector público, cuyo objeto y finalidad son los previstos en el artículo 67, que se aplica sobre el órgano, servicio o ente sometido a este tipo de control con periodicidad anual.

Artículo 77. *Ámbito de aplicación.*

1. Estarán sujetas a control financiero permanente aquellas entidades para las que la ley establezca dicha modalidad de control así como aquellas otras entidades o gastos que, en virtud de la habilitación establecida en la misma determine el Consejo de Gobierno.

2. El control financiero de los ingresos de cualquier otra naturaleza se realizará en forma de control financiero permanente cuando así lo disponga la Intervención General conforme a lo dispuesto en el artículo 94.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que acordará asimismo, las condiciones de ejercicio de dicha modalidad de control.

Artículo 78. *Ámbito objetivo del control financiero permanente.*

1. La Intervención General determinará el alcance y los objetivos de los informes de control financiero permanente y los desarrollará conforme a los correspondientes programas de trabajo elaborados al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.3.

2. El contenido mínimo a incluir en el alcance, en aquellas entidades sometidas al régimen de contabilidad presupuestaria, será el siguiente:

a) Expedientes de contratación, convenios, encargos, subvenciones y otros expedientes de gasto que supongan el reconocimiento de obligaciones frente a terceros.

b) Expedientes de ingresos que se gestionen por la entidad.

c) Gastos de personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo IV.

d) Operaciones extrapresupuestarias.

3. En las entidades no sometidas a contabilidad presupuestaria, además del contenido del apartado anterior, en las auditorías de cumplimiento se analizarán, al menos:

a) Los procesos de selección de personal, las bajas, modificaciones de categoría y otras modificaciones de las condiciones retributivas.

b) Las variaciones en las retribuciones respecto al ejercicio anterior, a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en las sucesivas leyes del Presupuesto y otra normativa de aplicación.

c) El cumplimiento de las obligaciones formales en relación con los tributos.

4. En las entidades a las que se refiere el apartado anterior, además de la auditoría de cumplimiento, se realizará una auditoría financiera, que incluirá, al menos, los aspectos siguientes:

a) Criterios de contabilización de transferencias, subvenciones y resto de fondos recibidos de la Junta de Andalucía.

b) Contabilización de los derechos de cobro frente a órganos de la Junta de Andalucía sometidos al régimen de contabilidad presupuestaria.

c) Contabilización de los bienes cedidos o adscritos a o por la entidad.

d) Verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,

e) Análisis de la correcta cumplimentación de los modelos de los presupuestos de explotación y de capital y del programa de actuación, inversión y financiación.

f) Evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas de actuación, inversión y financiación y de las previsiones de los presupuestos de explotación y capital.

g) Seguimiento de los planes de ajuste y planes de reequilibrio y económico-financieros previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

h) Seguimiento de la información remitida a efectos del cumplimiento del periodo medio de pago.

5. El alcance mínimo al que se refieren los apartados anteriores podrá ser ampliado a través del plan de control de cada ejercicio.

Artículo 79. Contabilización de documentos en entidades sometidas a control financiero permanente y al régimen de contabilidad presupuestaria.

En el desarrollo de la modalidad de control financiero permanente de las entidades con contabilidad presupuestaria, las intervenciones realizarán la contabilización en el presupuesto de las operaciones sujetas a control financiero permanente, salvo que la Intervención General disponga lo contrario. Los documentos contables contendrán la mención expresa de que se trata de operaciones sujetas a control financiero permanente.

SECCIÓN 3.ª SUPUESTOS DE CONTROL FINANCIERO NO PERMANENTE

Artículo 80. Entidades no sujetas a control financiero permanente.

1. La Intervención General incluirá en el Plan Anual de Control Financiero los controles a realizar sobre las agencias públicas empresariales, las sociedades mercantiles del sector público, las fundaciones, los consorcios, y los fondos carentes de personalidad jurídica que no se encuentren sujetas a control financiero permanente, en función de los medios disponibles en cada momento.

2. Para la selección de las entidades a incluir en el Plan se tendrán en cuenta razones de importancia cuantitativa y cualitativa, así como cualquier otra circunstancia que haga conveniente la realización de dicha inclusión. La periodicidad, de acuerdo con los medios disponibles, tendrá en cuenta asimismo dichas circunstancias.

3. Asimismo, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 89.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, podrá acordarse por la Intervención General la realización de controles financieros a órganos o servicios sometidos a control previo en los supuestos que considere necesario.

Artículo 81. El Control financiero de los ingresos: ámbito y competencias.

1. A excepción de los ingresos sometidos a control financiero permanente al que se refiere el apartado 2 del artículo 77, la gestión de los ingresos de la Junta de Andalucía y la devolución de ingresos indebidos de cualquier naturaleza está sometida a control financiero no permanente, en los términos regulados en el presente artículo.

2. El Plan Anual de Control Financiero detallará las actuaciones de control que vayan a desarrollarse en el ejercicio, que comprenderán, en todo caso, el control de legalidad de los ingresos gestionados por la Junta de Andalucía en el ejercicio anterior.

SECCIÓN 4.ª AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

Artículo 82. Finalidad.

La auditoría de los estados financieros es la modalidad de la auditoría financiera que tiene por finalidad la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Dicha auditoría constituye, para algunas entidades, una exigencia normativa que deben cumplir en función de su legislación específica y resulta independiente de las comprobaciones que han de realizarse en la auditoría financiera que se incluyen en el alcance objetivo del control financiero establecido en el artículo 68.1.b).

Artículo 83. Auditorías de estados financieros competencia de la Intervención General.

A la Intervención General, conforme al artículo 96.4 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, le compete realizar anualmente la auditoría de los estados financieros de las fundaciones del sector público andaluz obligadas a auditarse por su normativa específica, así como de la auditoría de los estados financieros de los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5.5 de la misma Ley. Para la realización de estos trabajos, sometidos en todo caso a las normas de auditoría del sector público, se podrán efectuar la contratación con firmas privadas de auditoría.

CAPÍTULO VII

El control financiero de las subvenciones y de los gastos cofinanciados con fondos procedentes de la Unión Europea

SECCIÓN 1.ª CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES

Artículo 84. *Objeto del control financiero de subvenciones.*

1. El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte de la persona beneficiaria conforme a las normas nacionales o comunitarias que, en su caso resulten de aplicación.

b) El cumplimiento por parte de las personas beneficiarias y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de las personas beneficiarias y las entidades colaboradoras.

d) La realidad y la regularidad de las actuaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por las personas beneficiarias y las entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas.

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por las personas beneficiarias y las entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

g) Que la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no supere el coste de la actividad o inversión desarrollada por la persona beneficiaria.

2. El control financiero de subvenciones podrá consistir en:

a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, de las personas beneficiarias y las entidades colaboradoras.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

d) La comprobación material de las inversiones financiadas.

e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión.

f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características especiales de las actividades subvencionadas.

3. En el caso de subvenciones financiadas total o parcialmente con fondos de la Unión Europea se tendrá en cuenta los requisitos que se establezcan por las disposiciones comunitarias y los documentos de programación.

Artículo 85. *Personas y entidades sometidas al control financiero de subvenciones.*

1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de las personas beneficiarias y, en su caso, las entidades colaboradoras por razón de las subvenciones de la Administración de la

Junta de Andalucía y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes, otorgadas con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía, bien financiadas con fondos propios o con fondos procedentes de la Unión Europea o con subvenciones finalistas del Estado.

2. El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas vinculadas o relacionadas con las personas beneficiarias, en los términos previstos en el artículo 8.1, para lo que se les notificarán las actuaciones que les conciernan, en los mismos términos que a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras.

Artículo 86. Obligación de colaboración.

1. Las personas beneficiarias, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación referidos en el artículo anterior estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán las facultades reguladas en los artículos 8 y 9.

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 95 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el personal funcionario encargado del control financiero de subvenciones, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de agente de la autoridad, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en acto de servicio o con motivo del mismo.

Artículo 87. Procedimiento de control financiero de subvenciones.

1. El ejercicio del control financiero de subvenciones se adecuará al Plan Anual de Control Financiero de la Intervención General.

2. Como regla general para la elaboración de la muestra de subvenciones que vayan a ser objeto de control se seleccionarán las subvenciones completamente pagadas y justificadas en el año anterior.

Con independencia de lo anterior podrán ser objeto de control aquellas subvenciones que sean propuestas por las Intervenciones como resultado de las funciones de control previo que tengan atribuidas o por denuncia motivada, así como consecuencia de los resultados de anteriores controles financieros de subvenciones, de auditorías de operaciones cofinanciadas con fondos europeos en los que se hayan detectado irregularidades que pudiesen conllevar reintegros.

En todos los casos descritos en el párrafo anterior, se podrá limitar el alcance del control financiero, mediante resolución de la persona titular de la Intervención General, a aquellos aspectos a los que se circunscribe el riesgo.

3. El control financiero de subvenciones se iniciará mediante notificación, que deberá realizar la Intervención actuante a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, en la que se indicará la naturaleza y el alcance de las actuaciones a desarrollar, la fecha de la visita, en su caso, por parte del equipo de control, y los demás elementos que se consideren necesarios. Las personas beneficiarias y, en su caso, las entidades colaboradoras deberán ser informados de sus derechos y obligaciones.

Todas las diligencias que se realicen, así como los informes que sean el resultado del control, tendrán naturaleza de documentos públicos y harán prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

4. Cuando en el desarrollo del control financiero se determine la existencia de circunstancias que pudieran dar origen a la devolución de las cantidades percibidas por causas distintas a las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, derivadas de la nulidad o anulabilidad del acto de concesión, se pondrán los hechos en conocimiento del órgano concedente de la subvención, que deberá informar sobre las medidas adoptadas, pudiendo acordarse la suspensión del procedimiento de control financiero.

La suspensión del procedimiento deberá notificarse a la persona beneficiaria o a la entidad colaboradora.

La finalización de la suspensión, que asimismo deberá notificarse a la persona beneficiaria o a la entidad colaboradora, se producirá cuando:

a) Una vez adoptadas por el órgano concedente las medidas que, a su juicio, resulten oportunas, las mismas sean comunicadas al órgano de control.

b) Si, transcurridos tres meses desde el acuerdo de suspensión, no se hubiera comunicado la adopción de medidas por parte del órgano gestor.

5. Cuando en el ejercicio de las funciones de control financiero se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención percibida, la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía podrá acordar la adopción de las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir la desaparición, destrucción o alteración de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga. En ningún caso se adoptarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

6. Cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos específicos en el desarrollo del control financiero, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 63.

Artículo 88. Los Informes de control financiero de subvenciones.

1. Los resultados del control financiero de subvenciones se plasmarán en informes en los que se reflejarán los hechos relevantes que se pongan de manifiesto y las conclusiones que de ellos se deriven. Los informes tendrán la estructura que establezca la Intervención General y serán firmados por la persona titular de la Intervención actuante.

2. El informe provisional se remitirá a la persona beneficiaria y, en su caso, a la entidad colaboradora, para que en el plazo de diez días emitan las alegaciones que se estimen oportunas. Una copia del mismo se remitirá al órgano concedente de la subvención para que, en el mismo plazo, aporte la documentación y emita las observaciones que se estimen oportunas. Si en el desarrollo del control se determina la existencia de circunstancias que pudieran dar origen a la nulidad o anulación del acto de concesión de la subvención, se comunicará en el informe dicha circunstancia para que el órgano concedente de la subvención proceda según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Una vez transcurrido el plazo para realizar las alegaciones, el control financiero finalizará con la emisión de los correspondientes informes definitivos de control financiero. Estos informes incluirán las alegaciones y observaciones presentadas por las personas beneficiarias y entidades colaboradoras y los motivos de las que no hubiesen sido admitidas por la Intervención actuante. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado, el informe provisional se elevará a definitivo.

4. Si como resultado del trabajo realizado no se detectan errores o incumplimientos se podrá emitir el informe definitivo sin que sea necesario cumplir con el trámite de alegaciones.

5. Una vez emitido el informe de control financiero, se podrá emitir un informe de recomendaciones independiente de aquel, que irá dirigido al órgano concedente, sobre las actuaciones que deban realizarse en orden a favorecer la corrección de las debilidades y defectos detectados sobre la gestión de las subvenciones, destacando entre ellas aquellas de especial relevancia. A su vez el órgano concedente receptor deberá remitir en el plazo de seis meses un informe sobre las recomendaciones implantadas que será objeto de seguimiento en el siguiente Plan de Control.

6. En el caso en que la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía detecte, bien en el seguimiento de recomendaciones regulado en el apartado anterior o con ocasión de la emisión del Informe de seguimiento de reintegros regulado en el artículo 91, que el órgano concedente no ha atendido alguna de las recomendaciones de especial relevancia realizadas o no ha emprendido las actuaciones relativas a los reintegros propuestos, se emitirá informe de actuación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73, entendiéndose que las referencias hechas en este precepto a la entidad controlada a la que va dirigido el citado informe, son aplicables al órgano concedente de la subvención en estos casos.

7. En el supuesto de que la subvención se haya financiado con fondos europeos, distintos de los agrícolas, y el informe definitivo concluya con propuesta de reintegro total o parcial se remitirá, además, al organismo intermedio de la autoridad de gestión del programa operativo correspondiente.

Artículo 89. Actuaciones del órgano concedente.

1. Cuando en el informe de control financiero se concluya la procedencia del reintegro total o parcial de la subvención, el órgano concedente, en el plazo máximo de dos meses desde la notificación del informe, deberá comunicar el inicio del procedimiento de reintegro.

2. El acuerdo de inicio será notificado a la persona beneficiaria y se dará traslado del mismo a la Intervención General.

3. La persona interesada podrá presentar las alegaciones y la documentación que considere oportuna.

4. Cuando el control financiero hubiera finalizado como consecuencia de resistencia, excusa, obstrucción o negativa, únicamente serán admisibles alegaciones y documentos que constaten que tal circunstancia no se produjo durante el control.

5. La resolución del procedimiento de reintegro no podrá separarse del criterio recogido en el informe de la Intervención actuante, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

6. Los órganos concedentes que deban ordenar la instrucción de los procedimientos de reintegro a propuesta de la Intervención General comunicarán a ésta, a efectos del seguimiento de los resultados de los controles realizados, la siguiente información:

a) El acuerdo de inicio y su notificación por parte de la Agencia Tributaria a la persona beneficiaria.

b) La resolución de reintegro y su notificación a la persona beneficiaria.

c) Los recursos interpuestos por las personas beneficiarias a la resolución de reintegro, tanto en vía administrativa como jurisdiccional y el acuerdo de suspensión del procedimiento, en su caso, y la resolución de los mismos.

Artículo 90. *Procedimiento de discrepancia sobre los informes de control financiero de subvenciones.*

1. Una vez iniciado el procedimiento de reintegro en virtud de lo establecido en el artículo 89.1, el órgano gestor, a la vista de las alegaciones presentadas por la persona beneficiaria, podrá plantear motivadamente discrepancia ante la persona titular de la Intervención General a través de la persona titular de la Viceconsejería del departamento al que pertenezca. El órgano gestor le comunicará a la persona beneficiaria el planteamiento de la discrepancia, haciéndole saber los efectos de ello previstos en el apartado siguiente.

2. Planteada la discrepancia, la persona titular de la Intervención General emitirá un informe en el plazo de un mes desde la recepción de la misma, y, si el informe fuera desfavorable, el órgano concedente de la subvención, en el plazo de un mes, deberá optar por una de las siguientes alternativas:

a) Aceptar el criterio de la Intervención General y continuar el expediente de reintegro.

b) Instar que se eleve el asunto al órgano competente, para su resolución definitiva, mediante el procedimiento previsto en el artículo 34.

3. El procedimiento de discrepancia suspenderá el plazo de resolución del expediente de reintegro.

Artículo 91. *Informe de seguimiento de los informes con propuesta de reintegros.*

1. Los órganos concedentes de subvenciones deberán notificar antes del 30 de marzo de cada ejercicio, el estado de los procedimientos de reintegro propuestos en los informes de control financiero de subvenciones emitidos por la Intervención General en ejercicios anteriores. En base a dicha información, los servicios centrales de la Intervención General emitirán un informe anual de seguimiento sobre la situación de dichos reintegros antes del 30 de junio con objeto de poner de manifiesto las actuaciones emprendidas en relación a los mismos así como posibles prescripciones de derechos.

2. Los destinatarios de dicha información serán las consejerías a las que se les haya comunicado la existencia de una posible causa de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como la Agencia Tributaria de Andalucía.

3. En el informe anual se reflejarán las cantidades a reintegrar así como la situación de cada procedimiento de reintegro, especificando cuáles están pendientes de recuperar tanto de manera individual como en cómputo global por consejerías.

4. Una vez emitido el informe de seguimiento de reintegros, en aquellos casos en los que el órgano concedente no haya emprendido las actuaciones relativas a los reintegros propuestos con ocasión de los informes de control financiero de subvenciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 88.6.

SECCIÓN 2.ª CONTROL DE LOS GASTOS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS

Artículo 92. *Objeto.*

1. El control de los gastos cofinanciados por fondos europeos tiene como finalidad garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de gestión y control de los programas operativos que se gestionan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la legalidad y la regularidad del gasto declarado en los mencionados programas.

2. Para alcanzar esta finalidad, en relación a los fondos estructurales y a otros fondos de

inversión europeos respecto de los que así se regule en los reglamentos comunitarios, la Intervención General realizará auditorías sobre las operaciones cuyo gasto haya sido declarado a la Comisión Europea en el ejercicio contable anterior y efectuará el análisis de los sistemas de gestión y control aplicados por los distintos organismos intermedios de la autoridad de gestión y de certificación de cada programa operativo.

3. Así mismo, la Intervención General llevará a cabo la auditoría de las cuentas presentadas a la Comisión Europea por la autoridad de certificación de los programas operativos en los que aquélla ejerza funciones de autoridad de auditoría o en las condiciones que establezca la autoridad de auditoría, cuando la Intervención General realice funciones de órgano de control.

4. Además de los referidos controles la Intervención General realizará, en su caso, auditorías temáticas sobre aquellas áreas o tipología de gasto que determine la Comisión Europea.

5. Asimismo, cuando el organismo intermedio de un programa operativo decida que los gastos a declarar se van a certificar mediante un sistema de costes simplificados deberá comunicarlo a la Intervención General, junto con un informe que contenga la aprobación del procedimiento y del método a aplicar. La Intervención General comprobará la adecuación del sistema de costes simplificados con carácter previo a la certificación de gastos o, en su caso, en el ámbito de las auditorías de operaciones.

Artículo 93. *Ejercicio del control.*

La Intervención General de la Junta de Andalucía actuará en el ámbito del control de los gastos cofinanciados con Fondos Europeos como órgano de control interno de la Junta de Andalucía, actuando asimismo en su condición de autoridad de auditoría o de órgano colaborador de control de los Programas Operativos de la Unión Europea, debiendo cumplir los requisitos que establezcan los reglamentos comunitarios para el desarrollo de dicha función.

Artículo 94. *Estrategia de auditoría.*

Para los programas operativos en los que la Intervención General es autoridad de auditoría, se elaborará la estrategia de auditoría, en la que se expondrá la planificación de las auditorías a realizar, tanto en el ejercicio en curso, como en los dos ejercicios siguientes, así como la metodología de auditoría y el método de muestreo que se vayan a aplicar. Dicha estrategia de auditoría será objeto de actualización anual.

Artículo 95. *Procedimiento de control.*

1. Cuando la Intervención General de la Administración del Estado ejerza las funciones de autoridad de auditoría, elaborará la muestra que va a ser objeto de control por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre los gastos que hayan sido declarados a la Comisión Europea en el ejercicio contable anterior al período de control.

2. Cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía esté designada como autoridad de auditoría, será ésta quien elabore la muestra de operaciones o proyectos certificados que se vayan a someter al control, y asumirá las funciones que le correspondan de acuerdo con la normativa comunitaria.

3. La persona titular de la Intervención actuante que haya realizado el control emitirá el informe provisional que se enviará al órgano controlado para que, en el plazo de diez días hábiles desde la recepción del informe, formule las alegaciones que estime oportunas. Simultáneamente, se remitirá el citado borrador al organismo intermedio de la Autoridad de Gestión para que formule las

consideraciones que estime oportunas en el mismo plazo. Adicionalmente, se comunicará a la Autoridad de Gestión y a la Autoridad de Certificación, para su conocimiento. La notificación de los informes definitivos se realizarán a los mismos destinatarios de los informes provisionales.

Artículo 96. Actuaciones del seguimiento del control de operaciones de fondos europeos que financien subvenciones y ayudas.

1. Cuando las operaciones objeto de control se hayan materializado mediante la concesión de subvenciones y ayudas, y como resultado del control se detectara la existencia de una causa de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano de control comunicará esta circunstancia al órgano concedente de la subvención para que evalúe y, en su caso, exija el reintegro que corresponda, de acuerdo con el artículo 128 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. A estos efectos no será de aplicación lo establecido en el artículo 95.bis de la citada Ley.

No obstante, el órgano controlado, una vez recibida la comunicación del resultado del control en cuestión, informará a la Intervención General en el plazo de dos meses acerca de la evaluación efectuada a propósito de las causas de irregularidades comunicadas. En el supuesto de que se acuerde el reintegro de la subvención, los servicios centrales de la Intervención General realizarán el seguimiento del mismo y se incluirá en el informe a que se refiere el artículo 91.

2. En todo caso, el control de las actuaciones del órgano concedente como consecuencia de los resultados de estos controles, podrá efectuarse mediante el ejercicio de la modalidad de control que en cada caso proceda, en atención a la naturaleza del órgano concedente, de la irregularidad advertida y de la situación procedimental en que se encuentre la subvención examinada. Dichas actuaciones podrán consistir en la realización de controles financieros de subvenciones, la realización de una auditoría operativa en caso de errores recurrentes o la inclusión de controles específicos en el alcance del control financiero permanente de las entidades concedentes.

Artículo 97. Planes de comprobación.

1. Si por la Intervención General se detectaran irregularidades sistémicas, el organismo intermedio del programa operativo deberá elaborar un plan de comprobación para la delimitación, en su caso, del error sistémico y para adoptar las medidas correctoras necesarias.

2. De dicho plan se dará traslado a la Intervención General para su revisión y validación del procedimiento aplicado y las conclusiones obtenidas. Del resultado se dará cuenta en el informe anual.

Artículo 98. Dictamen e informe anual.

La Intervención General, con carácter anual, elaborará para cada programa operativo en el que ostente la condición de Autoridad de Auditoría los informes y dictámenes que se establezcan por la normativa comunitaria, en los que se expongan las principales conclusiones de las auditorías realizadas y se emita opinión sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión y control sobre la legalidad y regularidad del gasto anotado en las cuentas cuyo reembolso se ha solicitado a la Comisión Europea, así como la confirmación de la imagen veraz de las cuentas presentadas.

Asimismo en dicho informe deberá incluirse una valoración de las medidas implantadas por parte del organismo intermedio en base al trabajo anual realizado por la Intervención General.

SECCIÓN 3.ª AUDITORÍA DEL ORGANISMO PAGADOR DE LOS FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS

Artículo 99. *La auditoría de los fondos europeos agrícolas.*

1. La Intervención General, en su calidad de organismo de certificación de las cuentas del Organismo Pagador de los fondos europeos agrícolas de la Comunidad Autónoma de Andalucía emitirá un dictamen, elaborado de conformidad con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas, sobre la regularidad, exactitud y veracidad de las cuentas anuales del citado Organismo, sobre el correcto funcionamiento de su sistema de control interno y sobre la legalidad y corrección del gasto para el que se solicita el reembolso a la Comisión Europea. El dictamen indicará asimismo si el examen arroja alguna duda sobre las afirmaciones realizadas en la declaración sobre la gestión.

2. El informe y el dictamen definitivos se remitirán al Organismo Pagador, a la autoridad competente y a la Intervención General de la Administración del Estado, para su remisión a la Comisión Europea.

3. Por otro lado, siguiendo las directrices marcadas por los reglamentos comunitarios, se realizarán los controles financieros a posteriori de las operaciones que integran la muestra que se elabora cada año por la Intervención General de la Administración del Estado sobre el gasto declarado de fondos europeos agrícolas en el ejercicio contable anterior.

4. La persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía, elaborará una estrategia de auditoría que defina el alcance, calendario y orientación de la auditoría de certificación, los métodos de auditoría y la metodología del muestreo que se vaya a aplicar a los informes a los que se refieren los dos apartados anteriores.

5. Cuando las recomendaciones requieran la atención inmediata de la autoridad competente o del responsable del Organismo Pagador o afecten a las condiciones generales de control, el citado Organismo Pagador deberá elaborar un plan de acción, al que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 97, para los planes de comprobación.

6. La Intervención General realizará anualmente un seguimiento de las recomendaciones formuladas en sus informes de auditoría y de las medidas correctoras adoptadas por el Organismo Pagador.

7. En el informe de certificación de cuentas del FEAGA-FEADER se incluirá la opinión de la Intervención General, en su calidad de organismo de certificación y órgano de control independiente, sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a la vista de las actuaciones contempladas en el párrafo anterior.

CAPÍTULO VIII

La supervisión continua

Artículo 100. *Supervisión continua de las entidades dependientes de la Junta de Andalucía.*

1. Corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía la supervisión continua de las entidades y organismos dependientes de la Junta de Andalucía, en los términos previstos en los artículos 96 bis y 96 ter del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en las disposiciones que los desarrollen.

2. El sistema de supervisión continua tiene como finalidad verificar la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de las entidades integrantes del sector público andaluz,

su sostenibilidad financiera y la concurrencia de las causas de resolución previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, referidas al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos.

3. Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación a realizar por la Intervención General en desarrollo de la supervisión continua a la que se refiere el apartado 1 anterior se regularán mediante Decreto.

Artículo 101. Principios orientadores del sistema.

El sistema de supervisión continua se regirá por los siguientes principios:

a) Autonomía e independencia: las actuaciones de supervisión continua se ejercerán con plena autonomía respecto de los organismos y entidades objeto del control, y los funcionarios que realicen el mismo tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades cuya gestión controlen y ajustarán sus actuaciones a las instrucciones impartidas al efecto por la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

b) Coordinación: atendiendo a que se configura como un sistema de carácter horizontal, deberá establecerse un canal de comunicación con los órganos que ejercen la tutela de los organismos o entidades del sector público andaluz. En particular, deberá coordinarse con la actuación que en materia de control de eficacia le corresponde a las distintas consejerías.

c) Eficiencia: tomando en consideración la finalidad del sistema de supervisión continua en relación con el análisis y evaluación de la vigencia de los fines que justificaron la creación de las entidades que integran el sector público andaluz, constituye un instrumento que debe contribuir a la eficiencia en el empleo de los recursos públicos.

d) Ejercicio contradictorio: se garantiza que, antes de formular las conclusiones y recomendaciones definitivas, se disponga de un plazo de alegaciones a formular tanto por parte de la Consejería a la que se encuentre adscrito como por el propio organismo o entidad sujeto a supervisión continua.

Artículo 102. Medios para lograr la finalidad del sistema.

Al objeto de conseguir la finalidad del sistema, como resultado de las actuaciones de supervisión continua, se valorará la formulación de:

a) Recomendaciones de mejora referidas a aspectos organizativos y estratégicos de la entidad u organismo, así como de gestión económica, presupuestaria y financiera, de recursos humanos y materiales, de gestión compartida, y, en general, relativas a cualesquiera otros elementos establecidos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para cada tipo de organismo o entidad.

b) Propuestas de supresión en los casos previstos legalmente.

c) Propuestas de transformación cuando la forma jurídica de las entidades no sea la adecuada de conformidad con los requisitos previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 103. Obligación de colaboración y de suministro de información.

1. Los organismos y entidades del sector público andaluz incluidos en el ámbito de aplicación del sistema de supervisión continua están obligados a colaborar con la Intervención General de la Junta de Andalucía y a suministrar todos los antecedentes, documentos, programas o archivos, preferentemente en soporte informático, con la finalidad de cumplir los objetivos del sistema.

2. Los órganos de vinculación, dependencia, tutela o adscripción de las entidades que integran dicho sector público contribuirán a dotar de operatividad al sistema, facilitando información

a la Intervención General de la Junta de Andalucía en los términos establecidos en convenios, protocolos generales de actuación o instrumentos similares.

CAPÍTULO IX

La contabilidad

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 104. Definición y competencias contables.

1. La contabilidad pública se configura como un sistema de registro, elaboración y comunicación de información sobre todos los ingresos, gastos, costos, patrimonio, y otros hechos económicos que afecten al sector público regional, de acuerdo con los principios recogidos en el artículo 108.

2. A efectos de este Reglamento, el sector público se considera integrado por la Junta de Andalucía, sus agencias, y las sociedades mercantiles del sector público andaluz; así como los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las fundaciones del sector público andaluz y demás entidades indicadas en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Respecto de estas entidades la Intervención General de la Junta de Andalucía resulta competente para la ordenación de las normas contables a las que se refiere el presente capítulo.

3. Además, la Intervención General es el órgano competente en la rendición de cuentas del resto de las entidades integradas en el sector Comunidades Autónomas de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales aprobado por el Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.

En relación a estas entidades la Intervención General tiene atribuidas las funciones de suministro de información contable en cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria a las que se refiere el capítulo X de este Reglamento.

Artículo 105. Objeto.

La contabilidad pública tiene por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo, del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados.

Artículo 106. Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en este capítulo son de aplicación a las siguientes entidades:

- a) La Administración de la Junta de Andalucía.
- b) Las agencias administrativas.
- c) Las agencias de régimen especial.
- d) Las agencias públicas empresariales.
- e) Las Instituciones de la Junta de Andalucía.
- f) Las sociedades mercantiles del sector público andaluz.
- g) Los consorcios definidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

- h) Las fundaciones del sector público andaluz.
- i) Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el Presupuesto de la Junta de Andalucía.

Artículo 107. Fines de la contabilidad.

La contabilidad pública se adecuará al cumplimiento de los siguientes fines:

- A) En el ámbito de la gestión:
 - a) Registrar la ejecución del Presupuesto de la Junta de Andalucía y proporcionar información para el seguimiento de los objetivos previstos en el mismo.
 - b) Conocer el movimiento y situación de la Tesorería General.
 - c) Reflejar las variaciones, situación y composición del patrimonio de la Junta de Andalucía.
- B) En el ámbito del control:
 - a) Proporcionar información para la elaboración de todo tipo de cuentas que hayan de rendirse al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
 - b) Suministrar información para la elaboración de las cuentas económicas del sector público, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
 - c) Proporcionar información para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 - d) Proporcionar información para el ejercicio de los controles de legalidad económico, financiero y contable.
 - C) En el ámbito del análisis y divulgación:
 - a) Suministrar información para posibilitar el análisis de los efectos económicos y financieros de la actividad de los entes públicos.
 - b) Suministrar información económica y financiera útil para la toma de decisiones a nivel de Gobierno o de Administración.
 - c) Suministrar información útil para otros destinatarios públicos o privados, en el marco de la legislación vigente.
 - d) Proporcionar la información contable sujeta a publicidad activa de conformidad con la legislación vigente en materia de transparencia y buen gobierno.
 - e) Suministrar información para la determinación de los costes de los servicios públicos.

Artículo 108. Principios contables.

1. La contabilidad de la entidad se desarrollará aplicando los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa aplicable, y en especial los siguientes:

a) Principio de imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los presupuestos de gastos e ingresos deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

1.º Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

2.º Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al presupuesto del ejercicio en que

se reconozcan o liquiden.

b) Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable deberá reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

c) Principio de presupuesto bruto. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados.

Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competente.

d) Principio de presupuesto anual. La aprobación y ejecución de los presupuestos se rigen por el principio de anualidad, sin perjuicio de que su elaboración se encuadre en un marco presupuestario plurianual a medio plazo.

2. También se aplicarán los principios contables de carácter económico patrimonial que se indican a continuación:

a) Principio de gestión continuada. Salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido.

b) Principio del devengo. El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos debe realizarse, desde el punto de vista económico-patrimonial, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, sin perjuicio de los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria.

c) Principio de uniformidad. No se variarán los criterios contables de un ejercicio a otro.

d) Principio de prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos, obligaciones, ingresos y gastos no se sobrevaloren ni se minusvaloren.

e) Principio de no compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo, ni las de gastos e ingresos que integran las cuentas anuales y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule.

f) Principio de importancia relativa. La aplicación de estos principios deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar, siempre que no se vulnere una norma de obligado cumplimiento.

3. En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables, deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la entidad.

Cuando la aplicación de estos principios contables no sea suficiente para mostrar la imagen fiel, deberá suministrarse en la memoria de las cuentas anuales la información complementaria precisa para alcanzar dicho objetivo.

SECCIÓN 2.ª COMPETENCIAS EN MATERIA CONTABLE

Artículo 109. *Órganos responsables.*

Son órganos responsables de la contabilidad pública:

a) La persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda.

b) La Intervención General de la Junta de Andalucía, como centro directivo y gestor de la

contabilidad pública.

La persona titular de la Intervención General y las distintas Intervenciones desarrollarán las funciones contables de la Intervención General dentro de sus respectivos ámbitos de actuación y de acuerdo con las directrices que sobre la materia imparta dicho titular.

Artículo 110. Funciones ejercidas por la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda.

Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Junta de Andalucía:

- a) Aprobar el Plan General de Contabilidad Financiera de las entidades del sector público sometidas a contabilidad presupuestaria.
- b) Aprobar el Plan General de Contabilidad de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía
- c) Aprobar las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas.
- d) Establecer la rendición de cuentas anuales consolidadas respecto de las entidades del sector público andaluz.
- e) Determinar los criterios generales de registro de datos, presentación de la información contable, contenido de las cuentas anuales que deben rendirse a los órganos externos de control y los procedimientos de remisión de las mismas regulando, a tales efectos, la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
- f) Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de consolidación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 111. Funciones ejercidas por los servicios centrales de la Intervención General.

1. Son funciones de los servicios centrales de la Intervención General, centro directivo de la contabilidad pública:

- a) Someter a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda los Planes de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía, sus agencias e Instituciones, los consorcios referidos en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las sociedades mercantiles del sector público andaluz, las fundaciones y los fondos carentes de personalidad jurídica referidos en el artículo 5 del citado Texto Refundido, al objeto de su posible coordinación y articulación con el Plan General de Contabilidad del sector público.
- b) Aprobar los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboren conforme a los Planes Generales.
- c) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en lo relativo a la estructura, justificación, tramitación y rendición de cuentas y demás documentos de la contabilidad pública, pudiendo dictar las resoluciones, circulares, instrucciones u órdenes de servicio necesarias.
- d) Establecer las reglas contables a las que habrán de someterse las entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, así como las que establezcan los criterios de coordinación de las actuaciones de los centros contables dependientes de la Intervención General. Asimismo, realizará las funciones de asesoramiento y resolución de consultas en materia contable.
- e) Inspeccionar la contabilidad de las agencias, instituciones, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del sector público andaluz, así como de las unidades dependientes del

subsector Comunidad Autónoma de Andalucía en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y dirigir las auditorías de los mismos.

f) La elaboración de los requerimientos funcionales a los que debe responder el sistema informático contable, en colaboración, en su caso, con otros centros directivos, así como la validación de las prestaciones funcionales del sistema informático como paso previo a su implantación.

g) Determinar las especificaciones, procedimientos y periodicidad de la información contable a remitir a la Intervención General por las entidades sujetas a principios contables públicos y la instrucción de procedimientos iniciados por los órganos competentes relativos a la imposición de las sanciones que se determinen por falta de rendición de cuentas, notable retraso en ellas o rendirlas con graves defectos.

h) Establecer los principios básicos de la contabilidad analítica y de coste de las entidades sometidas a contabilidad presupuestaria.

i) Someter a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda la aprobación de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público andaluz.

2. Son funciones de los servicios centrales de la Intervención General, como centro gestor de la contabilidad pública:

a) La gestión de las tablas del sistema de información contable necesarias para su correcto funcionamiento, entendidas como el establecimiento y mantenimiento del conjunto de variables que actúan sobre el sistema informático, de forma sistemática y repetitiva, definiendo las consecuencias contables para los supuestos predefinidos.

b) Formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía y presentarla ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.

c) Preparar las cuentas que hayan de rendirse al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas y recabar la información que se precise a estos efectos.

d) Contabilizar las operaciones que por su naturaleza o características específicas se considere que deban llevarse a acabo de forma centralizadas, así como la realización de rectificaciones contables que no proceda efectuar en los restantes centros contables.

e) La competencia y responsabilidad del Registro Contable de Facturas, regulado en el Decreto 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea dicho Registro y se establece su régimen jurídico, correspondiéndole, respecto de las entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, su gestión, administración y mantenimiento, la definición de especificaciones funcionales y técnicas, la custodia y explotación de la información contenida en el mismo, así como la autorización de los accesos al registro. Anualmente elaborará un informe anual en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.

f) Facilitar a los diferentes órganos de la Junta de Andalucía que no tengan acceso al sistema de información contable la información necesaria para la toma de decisiones a nivel de gobierno o administración.

g) Además de las funciones que se especifican en los apartados anteriores, la Intervención General de la Junta de Andalucía desempeñará cualquier otra función contable necesaria para el ejercicio de sus competencias.

Artículo 112. *Funciones ejercidas por las Intervenciones.*

Las diferentes Intervenciones realizarán las siguientes funciones:

a) Contabilizar en el sistema de información contable los documentos que correspondan a

las operaciones de modificación presupuestaria, de gasto o de ingreso o no presupuestarias realizadas por los órganos gestores correspondientes a su ámbito.

b) Efectuar las operaciones de traspaso y las demás actuaciones contables que se determinen en las órdenes que se dictan anualmente para regular el cierre de cada ejercicio presupuestario, así como las que se establezcan en cualquier otra disposición de carácter general.

c) Validación de los datos previa a la anotación en el Registro Contable de Facturas, elaboración de los informes trimestrales y emisión de los requerimientos periódicos de actuación previstos en la normativa reguladora de dicho Registro.

d) Efectuar el seguimiento de la justificación, por parte de los órganos competentes, de los libramientos de justificación posterior que se hayan contabilizado en sus respectivos ámbitos de control. A tal efecto desarrollarán las actuaciones que se determinen por la Intervención General.

e) Coordinar a los centros contables que, en su caso, se encuentren bajo su dependencia jerárquica.

f) Verificar, a través de la realización de auditorías y controles financieros, la existencia de obligaciones no registradas contablemente.

g) Aquellas otras funciones que se establezcan en la normativa que regula la contabilidad pública en la Junta de Andalucía y en las instrucciones y órdenes de servicio que en materia contable dicte la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

SECCIÓN 3.ª RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 113. *Disposiciones generales.*

1. Las entidades enumeradas en el artículo 106 están sometidas al régimen de contabilidad pública.

2. La sujeción al régimen de contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, por conducto de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Artículo 114. *Órganos responsables.*

1. Estarán sujetos a la obligación de rendir cuentas:

a) Las autoridades y el funcionariado que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de gastos, así como las demás operaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Las personas titulares de la presidencia o dirección de las agencias, las instituciones, y las sociedades mercantiles del sector público andaluz.

c) Las personas titulares de los consorcios, fundaciones, fondos sin personalidad jurídica y otras entidades del sector público andaluz.

2. Los órganos y entidades que deban proporcionar información para la formación de las cuentas deben colaborar con la Intervención General de la Junta de Andalucía aportando la información requerida en tiempo y forma, siendo responsables de su contenido, así como de los efectos que pudieran derivarse de su falta de presentación o de su presentación incorrecta o incompleta.

Los obligados a la rendición de cuentas son responsables de la información contable que les corresponde rendir en los plazos fijados en la normativa aplicable.

3. La responsabilidad de suministrar información veraz y coherente en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad contable regulada en el título VI del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en la que incurren quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.

4. La persona titular de la Intervención General podrá determinar las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la información contable a remitir por los órganos responsables.

Artículo 115. *La Cuenta General.*

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la Administración de la Junta de Andalucía y por las agencias, instituciones, consorcios, así como sociedades mercantiles del sector público andaluz, y fundaciones y fondos sin personalidad jurídica referidos en los artículos 3 a 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Esta Cuenta se formará y rendirá con carácter anual, de acuerdo con el contenido, procedimiento y plazos establecidos en el citado texto refundido.

Artículo 116. *Estructura de la Cuenta General.*

1. En relación con la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas, de régimen especial y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, los estados que componen la Cuenta General son los siguientes:

- a) Balance.
- b) Cuenta de resultado económico patrimonial.
- c) Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) Estado de flujos de efectivo
- e) Estado de liquidación del Presupuesto, dividida en cuatro partes:
 - 1ª. Estado de modificaciones de crédito.
 - 2ª. Liquidación del Estado de Gastos.
 - 3ª. Liquidación del Estado de Ingresos
 - 4ª. Resultado del ejercicio.
- f) Memoria

2. En relación con las sociedades mercantiles del sector público andaluz, fondos carentes de personalidad jurídica, fundaciones y otras entidades referidos en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la información contable que se integra en la Cuenta General estará constituida por las cuentas anuales presentadas conforme al Plan General de Contabilidad de aplicación. Junto a estos estados se incluirá, en los casos que proceda, la memoria y el informe de auditoría.

A la Cuenta General se acompañará:

- a) Cuenta General de la Deuda Pública y Endeudamiento de la Junta de Andalucía.
- b) Estado relativo a la evolución y situación de los anticipos de tesorería.
- c) Cuenta de avales otorgados por la Junta de Andalucía.
- d) Cuenta de Inmovilizado.
- e) Una memoria sobre el cumplimiento de los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados y el coste de los mismos.

3. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de hacienda se establecerán las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas así como para la elaboración de una

Cuenta General Consolidada.

Artículo 117. Formación de la Cuenta General.

1. La Cuenta General de cada año se formará y se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación en el plazo que establezca la ley en las fechas previstas en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. Las entidades cuyas cuentas deban integrarse en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán presentar a los servicios centrales de la Intervención General sus cuentas, debidamente aprobadas por el respectivo órgano competente, en los plazos establecidos en el citado texto legal y en la forma que establezca el citado órgano directivo, pudiendo determinar la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

3. La Intervención General podrá recabar de las distintas entidades la información que considere necesaria para efectuar los procesos de consolidación contable.

4. La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la Intervención General pueda formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las cuentas recibidas.

SECCIÓN 4.ª OTRAS OBLIGACIONES DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN

Artículo 118. Información al Parlamento de Andalucía.

Corresponde a los servicios centrales de la Intervención General de la Junta de Andalucía la formación de los estados contables que deban rendirse periódicamente al Parlamento de Andalucía, y que comprenderá en todo caso los estados de ejecución del Presupuesto, las operaciones de endeudamiento y el movimiento y situación de la Tesorería General.

Artículo 119. Publicación de información periódica.

1. La Intervención General publicará en el portal web de la Consejería competente en materia de hacienda los resúmenes de ejecución mensual correspondientes a la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas, de régimen especial, y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria.

2. Asimismo, con periodicidad trimestral, publicará la información relativa a las operaciones de ejecución del presupuesto, la situación y movimiento de la Tesorería General por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

Se publicarán también trimestralmente los principales Indicadores de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Anualmente la Intervención General publicará en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía y en el portal web citado en el apartado, la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía y aquella otra información exigible en virtud de la normativa sobre transparencia.

CAPÍTULO X

Obligaciones de suministro de información en aplicación de la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Artículo 120. Competencia.

1. La remisión de la información económico-financiera que se determine en la normativa

estatal sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las que se refiere el artículo 104.3, se centralizará a través de la Intervención General de la Junta de Andalucía, con sometimiento al principio de lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre Administraciones y al principio de transparencia como base de funcionamiento de las Administraciones Públicas.

2. Corresponde a los servicios centrales de la Intervención General la integración y rendición de la información contable de todas las entidades clasificadas como Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía según el Sistema Europeo de Cuentas, para la elaboración de las cuentas económicas del sector público de Andalucía y la determinación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

3. A los efectos anteriores, la Intervención General podrá recabar la información que resulte necesaria a todas las entidades afectadas. Igualmente, podrá articular procedimientos que faciliten la agregación y consolidación de la información y su tratamiento desde la perspectiva del mencionado sistema de cuentas.

4. Las Administraciones Públicas y demás sujetos integrantes del subsector Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, estarán obligados a proporcionar la colaboración necesaria y cuanta información, en el ámbito de la contabilidad nacional de las unidades públicas, sea fijada por la normativa interna y comunitaria.

Artículo 121. Medios de remisión de la información.

1. A las obligaciones de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a través del sistema habilitado al efecto por la Administración General del Estado, y mediante firma electrónica de la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía, salvo en aquellos casos en que se considere que no es necesaria su utilización.

2. La remisión de información se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva, en los plazos y mediante los procedimientos de remisión, incluidos los telemáticos, que se determinen en la normativa estatal sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 122. Facultad de la Intervención General para cumplir con las obligaciones de suministro de información.

La persona titular de la Intervención General podrá solicitar a todas las entidades integrantes del subsector Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales la remisión de cuantos datos sean necesarios para cumplir con las obligaciones a las que se refiere el presente capítulo, a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva en los plazos y mediante los procedimientos de remisión incluidos los telemáticos que se determinen por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Artículo 123. Obligaciones de suministro de información.

1. Las obligaciones de suministro de información a las que se refiere este capítulo son las que deriven del cumplimiento de la normativa reguladora aplicable en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de cualquier requerimiento de información

adicional que formule el Ministerio con competencias en materia de hacienda, o en su caso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal u órgano similar, en el ámbito de sus competencias y funciones.

2. Las entidades a las que les es de aplicación el contenido del presente capítulo son responsables del cumplimiento de las obligaciones de suministro e información económico-financiera relativa al ámbito de sus competencias, en lo que se refiere a los plazos establecidos, a la veracidad y exactitud del contenido, así como también del medio de remisión.

3. En caso de producirse algún incumplimiento del deber de suministro de información, se le requerirá, por parte de la persona titular de la Intervención General, a los efectos de que se proceda a atender la obligación incumplida en los plazos y forma que se determinen.

CAPÍTULO XI

El auxilio judicial y otras funciones de la Intervención General

SECCIÓN 1.ª EL AUXILIO JUDICIAL

Artículo 124. Competencias de la Intervención General.

1. Le corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía prestar el auxilio y colaboración a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, cuando así se lo requieran, dentro de los límites de las funciones y competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al citado órgano directivo. Esta función se desarrollará por parte de la persona titular de la Intervención General mediante la centralización, apoyo y asignación al personal adscrito a la Intervención, de las peticiones de auxilio judicial que se formulen.

2. El procedimiento de solicitud y designación de los funcionarios o funcionarias de la Intervención General, para intervenir como peritos, a solicitud de los órganos judiciales o del Ministerio Fiscal, se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la Administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes, o en la norma que lo sustituya en esta materia.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando alguna persona funcionaria dependiente de la Intervención General reciba una solicitud de auxilio judicial procedente de cualquier órgano jurisdiccional o del Ministerio Fiscal, lo pondrá en conocimiento inmediato de los servicios centrales correspondientes de la Intervención General, dándoles traslado de la comunicación recibida.

Artículo 125. Normas de reserva, secreto y protección de datos personales.

En todas las actuaciones de auxilio judicial que desarrolle la Intervención General se respetará escrupulosamente lo dispuesto sobre reserva y secreto de las diligencias judiciales en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, y sobre protección de datos personales, en el artículo 235 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artículo 126. Realización de las tareas generales de auxilio judicial.

1. Salvo indicación en contrario del órgano judicial o fiscal que las haya recabado, y sin perjuicio de lo establecido para las pericias judiciales en el siguiente artículo, las actuaciones de auxilio judicial desarrolladas al amparo de esta sección serán coordinadas y, en su caso, dirigidas por la jefatura de la división de la Intervención General que corresponda por las razones funcionales o materiales que correspondan.

2. Con la misma salvedad establecida en el apartado anterior, todos los informes que se emitan con destino a los juzgados, tribunales y fiscalía que los hayan solicitado, serán suscritos por la persona o personas designadas y serán remitidos por la persona titular de la Intervención General al órgano judicial o fiscal correspondiente, todo ello con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 125.

3. Las personas funcionarias a las que se les encomiende la realización de tareas de auxilio judicial, tendrán a su disposición todos los medios materiales con que cuente la Intervención General. A tal efecto, dispondrán de los accesos necesarios a los sistemas informáticos y bases de datos de los que disponga dicho centro directivo.

Artículo 127. Realización de las tareas de pericia judicial.

1. Cuando las solicitudes formuladas por los órganos judiciales y fiscales reúnan el requisito previsto en el apartado 1 del artículo 124 y consistan en la realización de una prueba pericial, la persona titular de la Intervención General, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4/2018, de 16 de enero, comunicará al órgano administrativo periférico de la Consejería competente en materia de justicia y al órgano judicial o fiscal que corresponda, el nombre de la persona o personas designadas para la realización de la pericia de que se trate.

2. La persona titular de la Intervención General, al formular la designación de quien deba ser propuesto para realizar la correspondiente pericia, procurará seleccionar a la persona funcionaria más idónea, de acuerdo con su formación, especialización y experiencia, la cual tendrá la obligación de intervenir como perito en los procedimientos judiciales para los que haya sido designada, salvo que concurran las causas generales de abstención o recusación, cuando cuente con la competencia técnica necesaria.

3. Lo establecido en el apartado 1 anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que el órgano judicial solicite la designación individualizada de una determinada persona funcionaria para actuar como perito.

4. Las personas designados para las pericias judiciales, las llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones que se dicten por el órgano judicial o fiscal que las haya recabado, en cuanto a su objeto, alcance y demás extremos necesarios para su realización.

SECCIÓN 2.ª OTRAS FUNCIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

Artículo 128. Asistencia a mesas de contratación.

1. En las mesas de contratación que se constituyan, de manera obligatoria o facultativa, para la asistencia técnica a los órganos de contratación pertenecientes a la Administración de la Junta de Andalucía y a sus entidades dependientes o vinculadas, que tengan la consideración de Administración Pública, a los efectos previstos en la legislación de contratos del sector público deberá figurar necesariamente entre sus vocales una persona representante de la Intervención

General de la Junta de Andalucía.

2. Ordinariamente, la persona representante de la Intervención en la mesa será la persona titular de la Intervención que ejerza como tal el control interno del órgano de contratación, o quien le sustituya, de acuerdo con las reglas de sustitución previstas en este Reglamento.

3. No obstante lo establecido en el apartado 2, por razones de eficacia, la persona titular de la Intervención General podrá designar a otras personas funcionarias pertenecientes a dicho centro directivo para que asistan regularmente como vocales representantes de la Intervención a todas las mesas de contratación que se celebren en un ámbito orgánico o territorial determinado o a una mesa de contratación en particular.

4. En el caso previsto en el apartado 3, la persona titular de la Intervención General se dirigirá a los órganos de contratación, indicándoles la persona o personas funcionarias designadas, con el fin de que sean nombrados para las mesas a las que deban asistir.

5. La persona titular de la Intervención General dictará las instrucciones y órdenes de servicio necesarias para determinar las condiciones generales de la presencia y de las funciones de la persona representante de la Intervención en las mesas de contratación, así como los criterios de actuación de su participación en las decisiones sobre admisión de licitadores y propuesta de selección de adjudicatarios que no condicionarán el criterio que deba adoptar sobre otras cuestiones relacionadas con el expediente de contratación, como órgano de control interno, tanto en el ámbito del control previo, como del control financiero.

6. El alcance de las funciones que desempeñen quienes intervengan en las mesas de contratación en representación de la Intervención será el mismo de los demás vocales, concurriendo a la formación de la voluntad del órgano colegiado con la misma extensión y condiciones que aquellos.

Artículo 129. Asistencia a órganos colegiados.

Las normas de creación de órganos colegiados no podrán establecer la pertenencia a los mismos del funcionariado que ocupe puestos de trabajo en las Intervenciones que formen parte de la estructura de la Intervención General, salvo que expresamente lo autorice la persona titular de la misma.

Artículo 130. Competencias en materia de tesorería.

Las unidades de Intervención que tengan asignadas las funciones de control de la Dirección General con competencias en materia de tesorería, y de las consejerías, las agencias administrativas y de régimen especial, ejercerán, en cada caso, las siguientes funciones que les encomienda el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria:

a) Firma como claveros de las cuentas tesoreras y autorizadas de toda clase de movimientos que se realicen en las mismas, que tendrá como única finalidad constatar la competencia del resto de claveros que concurren a la firma de la operación de que se trate.

b) Firma de las actas de conciliación mensuales de las cuentas tesoreras y de las cuentas autorizadas, junto con las personas titulares de los órganos administrativos a cuya disposición se encuentren las mismas.

c) Firma de las actas de conciliación trimestrales y de los arqueos anuales de la Caja General de Depósitos.

d) El control de los embargos y las cesiones de crédito, en los términos que establezca la

persona titular de la Intervención General.

e) La comprobación en los pagos presupuestarios de la existencia de un título justificativo de los mismos, y la competencia del órgano proponente.

Artículo 131. Informes previos de las bases reguladoras de subvenciones.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía los proyectos de bases reguladoras de subvenciones y sus modificaciones deben someterse a informe de la persona titular de la Intervención General, que será el último en emitirse, en el plazo de 15 días desde la entrada de la solicitud, de entre los previstos en el artículo 4 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo..

El informe debe versar únicamente sobre el cumplimiento de la normativa económico-presupuestaria y contable.

2. Se someterán a informe de la Intervención General los proyectos de bases reguladoras de subvenciones regladas que tengan que aprobarse por las personas titulares de las consejerías correspondientes, así como los proyectos normativos que tengan por finalidad la modificación de bases reguladoras de concesión de subvenciones existentes.

3. El órgano competente para solicitar el informe es el centro directivo que, a estos efectos, haya designado cada Consejería, Si no se ha efectuado la referida designación, se considerará competente para la petición del informe a la persona titular de la Secretaria General Técnica de la Consejería.

4. Al proyecto de base reguladora deberá acompañarse:

a) El plan estratégico establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, donde se enmarquen las subvenciones objeto del proyecto.

b) Una memoria justificativa y oportunidad del proyecto.

c) Una memoria económica expresiva de los aspectos económico-presupuestarios del proyecto con estudio del impacto temporal y territorial, y que contenga de manera clara y medida la estimación del coste a que dará lugar y su forma de financiación.

5. El alcance del informe, en lo que se refiere al análisis de la normativa económico-presupuestaria y contable, se extenderá a los extremos siguientes:

a) Verificar que las bases reguladoras traen causa de un plan estratégico en los términos del artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o, en su caso, de los planes y programas sectoriales previstos en la Disposición adicional decimotercera de la mencionada Ley.

b) La determinación de los requisitos que deben ser comprobados y certificados por el órgano instructor del expediente a efectos de la fiscalización previa del compromiso de gasto.

c) La forma y secuencia del pago.

d) El plazo y la forma de justificación.

Artículo 132. La Base de Datos de Subvenciones.

1. La Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía, que integrará todas las subvenciones y ayudas otorgadas por órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, que deban registrarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, tiene como fin promover la transparencia, mejorar la gestión, ayudar a la planificación estratégica y luchar contra el fraude. Además, será el instrumento de publicidad activa de las subvenciones a los efectos

contemplados en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

2. La Intervención General es el órgano responsable de la administración y custodia de la información registrada en la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía, así como el órgano competente para suministrar la información que requiera a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

3. Se habilita a la Consejería competente en materia de hacienda para dictar las disposiciones de desarrollo del presente Reglamento determinando los elementos de información y los documentos integrantes de la Base de Datos de Subvenciones, así como los plazos y los procedimientos de remisión de la información para su inclusión en la misma, así como la información que deba ser objeto de publicación.

Artículo 133. Informe sobre la condición de medio propio personificado.

Corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía el informe sobre la acreditación en la memoria prevista en el apartado 3 del artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de los requisitos para la consideración de medio propio personificado de la Junta de Andalucía a los efectos de los encargos de los poderes adjudicadores regulados en la mencionada ley.